

*01G

ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a 13 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen los señores diputados.

–A las 11.10 dice el:

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Por Prosecretaría se tomará asistencia.

–Se encuentran presentes los señores diputados: Acosta, Allende, Angerosa, Anguiano, Artusi, Báez, Bahillo, Bahler, Bisogni, Darrichón, Guzmán, Kneeteman, Koch, La Madrid, Lambert, Lara, Lena, Monge, Navarro, Osuna, Pross, Romero, Rotman, Ruberto, Sosa, Toller, Troncoso, Urribarri, Valenzuela, Vázquez, Viola, Vitor y Zavallo.

APERTURA

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Con la presencia de 33 señores diputados queda abierta la 1ª sesión especial del 137º Período Legislativo.

Se deja constancia desde esta Presidencia que de acuerdo al Artículo 144 de la Constitución se requiere la presencia de tres cuartos de los miembros de la Cámara, es decir de 26 diputados, y habiendo 33 ocupando sus bancas, se cumple con lo establecido.

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Invito al señor diputado Marcelo Bisogni a izar la Bandera Nacional y al señor diputado Juan Carlos Darrichón a izar la Bandera de Entre Ríos.

– *Se izan las Banderas. (Aplausos.)*

ACTA

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Por Prosecretaría se dará lectura al acta de la 20ª sesión ordinaria, celebrada el 6 de diciembre del año en curso.

– *A indicación del señor diputado Bahillo se omite la lectura y se da por aprobada.*

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Por Secretaría se dará lectura a los antecedentes de la presente sesión.

SR. PROSECRETARIO (Cornejo) - *(Lee)*

"Paraná, 7 de diciembre de 2016.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
D. SERGIO D. URRIBARRI
PRESENTE.

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Presidente a los efectos de solicitar convoque a la Cámara a Sesión Especial para el día martes 13 de diciembre a la hora 11.00, a efectos de tratar el Expediente Administrativo Nro. 2.598, pedido de Juicio Político al Sr. Carlos Alberto Chiara Díaz.

Saludamos a Ud., con atenta consideración".

Acompañan la nota seis firmas. (Bahillo – Kneeteman – Navarro – Zavallo – Troncoso - Bahler)

"DECRETO Nro. 123 HCD
137º Período Legislativo
Paraná, 7 de diciembre de 2016.

VISTO:

El pedido formulado reglamentariamente y fundado por varios señores diputados de convocatoria a sesión especial para el día martes 13 de diciembre de 2016 a la hora 11.00, para tratar el Expediente Administrativo Nro. 2.598 de pedido de Juicio Político al Sr. Carlos Alberto Chiara Díaz, y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud se encuadra en los términos que establece el Artículo 16º del Reglamento de esta Cámara,

Por ello:

**EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DECRETA:**

ARTÍCULO 1º - Convocar a los Señores Diputados a sesión especial a realizarse el día martes 13 de diciembre de 2016 a la hora 11.00, para tratar el Expediente Administrativo Nro. 2.598 de pedido de Juicio Político al Sr. Carlos Alberto Chiara Díaz

ARTÍCULO 2º - Por Prosecretaría se harán las citaciones correspondientes.

ARTÍCULO 3º - Comuníquese, etcétera".

**DICTAMEN DE COMISIÓN
Ingreso y reserva**

SR. BAHILLO - Pido la palabra.

Señor Presidente: solicito se dé ingreso y que quede reservado en Secretaría el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, en el Expediente Administrativo Nro. 2.598 por el cual se ha convocado esta sesión.

SR. PRESIDENTE (Uribarri) – Si hay asentimiento, así se hará.

– **Asentimiento.**

SR. KNEETEMAN - Pido la palabra.

Señor Presidente: quiero pedir que se incluya entre los firmantes del dictamen al diputado Vitor, quien por razones particulares no se encontraba al momento de la firma.

SR. PRESIDENTE (Uribarri) – Así se hará, señor diputado.

**DICTAMEN DE COMISIÓN
Consideración**

SR. PRESIDENTE (Uribarri) – Queda en consideración el dictamen de comisión recientemente ingresado.

SR. LARA - Pido la palabra.

Señor Presidente: en primer lugar quiero solicitar autorización para poder proceder a dar lectura al dictamen de referencia, independientemente de algunas consideraciones que haré.

SR. PRESIDENTE (Uribarri) – Si hay asentimiento, así se hará.

– **Asentimiento.**

SR. LARA – Señor Presidente: tal cual ha sido convocada la presente sesión especial, nos convoca abordar el dictamen que ha formulado en el día de la fecha la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que en su condición de Comisión Investigadora, de acuerdo a lo que manda la Constitución de los entrerrianos, hemos emitido y paso a formular las consideraciones y la lectura del mismo.

En la ciudad de Paraná, a los 12 días del mes de diciembre del año 2016, reunidos los miembros de la Comisión y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 143 de la Constitución provincial, expresamos: Visto el expediente administrativo Nro. 2598 de la Honorable Cámara de Diputados caratulado “Chiara Díaz, Carlos Alberto s/ Juicio Político por mal desempeño en sus funciones”; y resulta: Primero. Consideraciones Preliminares. Se promovió denuncia de Juicio Político por parte del doctor Carlos Reggiardo por ante la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, en fecha 14 de noviembre de 2016, contra el Vocal del Excelentísimo Superior Tribunal doctor Carlos Chiara Díaz, originándose el Expediente Administrativo Nro. 2.598.

*T02Cep

En las mencionadas actuaciones, el denunciante doctor Carlos Reggiardo, cuyos datos de identidad obran acreditados, funda su denuncia sosteniendo que existió mal desempeño en el ejercicio de las funciones que el doctor Carlos Alberto Chiara Díaz viene ejerciendo como Juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, solicitando se investiguen los hechos que expone.

Sostiene el denunciante que se funda en una situación que es conocida por todo el foro de abogados, consistente en ausencias y viajes por otros trabajos que tiene el Vocal Chiara Díaz desde hace mucho tiempo y que le llevan a abandonar sus tareas en el Superior Tribunal de Justicia una, dos y hasta, a veces, tres días por semana. Que esas actividades –afirma– no se relacionan con las funciones que la Constitución provincial les asigna a los magistrados.

Afirma que tal circunstancia está agravada porque, leo textualmente parte de la denuncia “...cobra su remuneración como juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por días no trabajados para el Poder Judicial de Entre Ríos; percibe viáticos por misiones oficiales que no son tales, viaja gratis en avión a Buenos Aires, tiene otras remuneraciones y cobra otros viáticos relacionados a otros trabajos que Chiara Díaz realiza en el horario en el que supuestamente debería estar trabajando en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; percibe viáticos de las arcas entrerrianas a sabiendas

de que no debiera cobrarlos porque sus viajes no tienen relación causal a sus tareas jurisdiccionales; engaña a su empleador para viajar gratis; es un funcionario público”.

Prosigue su relato dando detalles sobre la modalidad de los hechos denunciados, que esta Comisión resumiría en los siguientes puntos:

Primero. Chiara Díaz prácticamente todas las semanas del año informa al Superior Tribunal que debe realizar una comisión de servicios fuera de la jurisdicción, generalmente en Buenos Aires, para lo cual solicita los viáticos correspondientes a una misión oficial y que, además, el Poder Judicial le reconozca los gastos de traslado, pasajes en avión ida y vuelta.

Segundo. Se ausenta de su despacho una, dos y hasta tres días por semana.

Tercero. Eso ocurre con reiteración en los últimos 10 años.

Cuarto. No viaja a cumplir diligencias oficiales –como invoca– sino para dar clases en distintas universidades, es decir, se ausenta para trabajar en otro lado y de ese modo percibir su remuneración como Juez, con los emolumentos que le hayan liquidado y además, sus honorarios y en algunos casos también viáticos, como docente.

Quinto. Que es públicamente conocido que jueves y viernes el doctor Chiara Díaz no está porque está “dando clases” en Buenos Aires.

Sexto. Que el mal desempeño se configura por el mero ocultamiento –mentira– sobre la verdadera razón de sus constantes viajes y ausencias, sosteniendo el denunciante que un Juez de la Provincia no puede ocultar que tiene otro trabajo y que en el horario de trabajo que es solventado con el esfuerzo de los entrerrianos, él desvía su fuerza laboral para percibir honorarios como docente, viáticos y pasajes en avión.

Séptimo. Sostiene que tales circunstancias son independientes de tener el despacho al día o no, sino que se vinculan con el propósito de la función judicial.

Octavo. Afirma que no se trata de que el Juez deba estar en determinados horarios en su despacho, sino de desarrollar dos actividades paralelas y antagónicas, percibiendo salario del Poder Judicial sin aportar contraprestación. A tales situaciones las encuadra en, leo textualmente la denuncia: “...tres notas características que los tratados internacionales utilizan para definir “la corrupción”: abuso de poder, beneficio propio y menoscabo a un bien público”.

Noveno. Que tales conductas se muestran abusivas, pidiendo a la Comisión que se investigue y se produzca prueba y, eventualmente, se mande devolver el probable perjuicio producido.

Décimo. Propone pruebas, entre las cuales las obrantes en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en las que obran aportes por la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNL y universidades con asiento preferentemente en Buenos Aires, como la UBA, Museo Social, del Salvador, entre otras.

Número 11. Funda su denuncia en lo dispuesto por Artículo 37, último párrafo y Artículos 138, 140, 189 y concordantes de la Constitución Provincial, citando fallo de la Corte Suprema y definiendo conforme la doctrina la causal de “mal desempeño”, que no requiere que exista delito sino el desvío de poder y el mal ejercicio de la magistratura, entre otros conceptos.

Número 12. También el denunciante desarrolla el concepto de mal desempeño vinculado a los deberes positivos de los jueces, que deben observar y respetar pautas éticas como honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, sin recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a sus tareas como magistrados, entendiendo que estos deberes han sido desatendidos por el denunciado.

Señor Presidente: así fijados los hechos que el denunciante atribuye al Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, es necesario establecer inicialmente que la denuncia aparece clara, fijando hechos concretos que configurarían –de comprobarse, como ya lo veremos– la causal de mal desempeño y la misma es sustancialmente distinta de aquella evaluada por esta misma Comisión durante el mes de agosto del corriente año, que motivara, oportunamente, por el pleno de este recinto, su rechazo *in limine*.

En síntesis, señor Presidente, se afirma entonces por el denunciante que durante los últimos diez años, en reiteradas oportunidades, el doctor Carlos Alberto Chiara Díaz se ausentó de su lugar de cumplimiento de funciones en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Sala Penal y Constitucional, gozando de autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción, licencia y en ocasiones viáticos por parte del Estado, para desarrollar, fuera de la ciudad, labores que no eran ni son propias de la función judicial para la que fuera designado.

El punto dos del dictamen, lo hemos denominado: Defensa material y descargo.

Prosiguiendo con el desarrollo del presente dictamen, es menester hacer una reseña de los argumentos vertidos por el denunciado al ejercer su defensa material y también en escrito patrocinado por su abogado defensor.

El 1 de diciembre de 2016, como fue de público conocimiento, concurrió a la

Comisión de Investigación. Fue informado por quien les habla, en mi condición de Presidente de la Comisión, de los hechos que se le atribuían y la prueba dispuesta. El doctor Chiara Díaz estuvo exponiendo por aproximadamente 40 minutos. Manifestó su sorpresa por las presentes actuaciones, se refirió a sus 50 años en el Poder Judicial y en ocasiones cuestionó a los demás Vocales del Superior Tribunal como a los miembros de nuestra Comisión, preguntándose, en forma retórica, quién tenía integridad moral para acusarlo. Pidió que a todos los Vocales del Superior Tribunal de Justicia les hagan la misma investigación.

Dijo que sus licencias estaban autorizadas por otros miembros del Superior Tribunal. Refirió en términos que no reproduciremos en este dictamen, a la Presidenta doctora Claudia Mizawak, que obran en la versión taquigráfica agregada al expediente, pero luego sus dichos serán analizados a tenor de la prueba reunida. Insinuó, claramente, que no era el único que tomaba licencias o salía de la jurisdicción del modo que se le cuestiona. Ante preguntas concretas formuladas por los miembros de la Comisión, no negó en modo alguno que haya dado clases en Buenos Aires en días hábiles de la semana, pero asevera que ello no es contradictorio, ni siquiera si es remunerada la tarea. Dijo que estaba “limpito”, que no sabe si todos están como él. Que no lo tomen a él “solito”, que él es la “cabeza de turco” y otras consideraciones.

En definitiva, lo que planteó respecto de la imputación es que no percibió viáticos indebidamente, que realizó tareas de la Vocalía, que salía siempre autorizado y que la prueba reunida, oficios librados y documental acompañada, no debió colectarse sin su intervención.

*T03M

Por mi parte, señor Presidente, se le aclaró que desde el inicio de las actuaciones y más precisamente al librarse los oficios, fue notificado de todo lo actuado. No obstante ello, dejó planteado que se había vulnerado su derecho de defensa, que había “cosa juzgada” entendiéndolo que esta denuncia es idéntica a la anterior, que no tiene despacho atrasado, y no respondió a una pregunta concreta que le formulara este Presidente respecto de un examen de ADN que se hizo en Buenos Aires encontrándose de licencia con viáticos pagos por el Estado.

Ya en su descargo por escrito, con abogado patrocinante, planteó en su defensa la aplicación parcial del principio *non bis in ídem*, diciendo que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Al respecto, sostiene que el principio aludido es una garantía

en cualquier tipo de proceso, que integra el derecho de defensa. Asimismo, en el escrito sostiene que docencia y magistratura no son actividades incompatibles, en tanto no se afecte la actividad como juez. Dice que el denunciante no planteó la actividad incompatible que establece el Artículo 37 de la Constitución Provincial, entendiendo que no existe ningún reproche respecto de que no tenga –el denunciado– el despacho al día.

A su vez, en torno a los viáticos y licencias tomados, sostiene que el Superior Tribunal de Justicia tiene reglamentado el régimen de licencias para los magistrados y funcionarios mediante el Reglamento Nro. 3, modificado por Acuerdo General Nro. 29/96 y Nro. 2/07, y un régimen propio para los vocales que alcanza a 2.500 pesos por día, más gastos de traslado y hasta cuatro días por mes, los que son autorizados por el alto cuerpo. Solicita se disponga agregar documental –proveída y agregada luego por esta Comisión–, e impugna “por falsedad”, sin expresar ningún argumento para sostener la imputación, el informe de la Universidad de Belgrano que obra en estas actuaciones.

Impugnó asimismo, el denunciado, la agregación de los expedientes “Del Valle Mac Dougall, Liliana Mercedes y otro c/Chiara Díaz, Carlos Alberto s/alimentos”, y “Del Valle Mac Dougall, Liliana Mercedes y otro c/Chiara Díaz, Carlos Alberto s/filiación”, por considerar que lo investigado no concierne a lo que es objeto de esos litigios. Luego, analizaremos, señor Presidente, por qué la Comisión admitió esa prueba como pertinente.

Señor Presidente, un párrafo final en este apartado del dictamen, entendemos que merece el trato dispensado a los miembros de la Comisión por parte del doctor Chiara Díaz en la oportunidad de concurrir a ser oído. Llegó hasta el extremo de imitar a una legisladora, a imputar en general que nadie estaba “limpito” para juzgarlo y demás consideraciones despectivas que surgen de la versión taquigráfica respecto de los legisladores y de los Vocales –sus pares– del Superior Tribunal de Justicia.

Ese proceder desluce el accionar del magistrado y le coloca en posición de no respetar las instancias previstas por la Constitución y las leyes, que cotidianamente debe aplicar. No podemos, señor Presidente, dejar de observarlo, porque ello evidencia un accionar que poco tiene que ver con el decoro. Pero hacemos esta mención, también para decir que consideramos haber procedido con ecuanimidad y respeto hacia el magistrado, y al hacer las consideraciones y valoraciones en este proceso de investigación, solo tenemos en cuenta las pruebas objetivas arrimadas a la causa, sin ningún tipo de carga subjetiva por el proceder aludido, que mencionáramos porque

aparece necesario en defensa de la institucionalidad.

Así descriptos y señalados los términos de la denuncia y de la defensa, pasaremos a analizar los mismos, para arribar a la conclusión que es debida por esta Comisión de Investigación, a efectos de emitir el presente dictamen que deberá ser sometido hoy en esta sesión de la Cámara de Diputados convocada al efecto.

Punto tres. Hemos denominado a este punto del dictamen, señor Presidente, “Procedimiento llevado adelante - Garantías del vocal denunciado - *Non bis in ídem*”. Me permito hacer la siguiente consideración. Lo denominamos a este acápite del dictamen de esta forma porque concentramos el esfuerzo de la Comisión en dejar bien en claro que se han respetado debidamente en cada uno de los pasos del procedimiento que llevamos adelante, a partir de promovida la denuncia de Juicio Político hasta el día de la fecha en que emitimos el dictamen, su debido derecho de defensa que lo asiste como a cualquier ciudadano, como asimismo también desestimamos el mentado principio que argumentó del *non bis in ídem*, que paso a explicar.

Como decía, un apartado especial merece este aspecto porque, señor Presidente, el Vocal denunciado en oportunidad de intervenir en este proceso que llevó adelante la Cámara de Diputados a través de la Comisión expresó, en todas y cada una de las oportunidades en que intervino formalmente en el proceso de investigación, que se le había vulnerado su derecho de defensa, incluso lo sostuvo y lo argumentó insistentemente en sus apariciones en los medios. El dictamen cita todas y cada una de las intervenciones, las cuales doy por reproducidas, en cada una de las fojas en que intervino.

El otro argumento central esgrimido –como recién decía– por el doctor Chiara Díaz, fue la aplicación del principio *non bis in ídem* pues considera que al conformar una de las garantías del debido proceso se aplica a todos los procesos, incluso el que nos ocupa, sosteniendo que los hechos que se le atribuyen en el presente procedimiento ya han sido planteados en el anterior pedido de juicio político presentado este mismo año conforme Expediente Nro. 1.295, y que al haber sido rechazado el pedido de juicio político por el pleno de la Cámara de Diputados, debe entenderse que opera la cosa juzgada y, en consecuencia, debería rechazarse la pretensión del denunciante que esta Comisión abrió a investigación.

Debemos entonces en este punto, y de eso me voy a ocupar desarrollando el dictamen, por un lado, hacer una breve reseña de los pasos fundamentales que ha tenido

el procedimiento en esta instancia investigativa, los que demuestran –como dije, y lo vamos a recalcar en varias oportunidades en el dictamen– que se han respetado íntegramente sus garantías fundamentales.

Haciendo una obvia aclaración, señor Presidente, que en nuestro orden normativo público provincial, como todos sabemos, no contamos con una norma, una ley provincial que regule el procedimiento o el trámite de Juicio Político, que sí se encuentra establecido en las normas de procedimientos que la Constitución establece.

Pero también marcamos, como se ha dicho acá, en esta Legislatura, que la estructura normativa de rango constitucional –a la que recién hacía referencia– es lo suficientemente reglamentaria, no solo del funcionamiento de la Comisión que integramos, de la Comisión de Investigación, sino de las condiciones del ejercicio en la etapa del derecho de defensa del sujeto imputado. En este sentido, de la hermenéutica de las normas constitucionales se desprende que esta Comisión que integramos ha procedido en forma prolija y minuciosa al haberse aferrado a cada una de las normas del procedimiento que la Constitución determina.

Señor Presidente, observamos de lo que textualmente determinan los artículos y luego analizaremos cada uno de los pasos que ha tenido este procedimiento para determinar si se respetó el debido proceso en esta etapa, dejando aclarado que no estamos en la fase o etapa del juicio, es decir en la instancia en la que se impartirá finalmente la decisión de una sanción o no, de carácter política, merituando los hechos en que se funde la acusación, tarea que deberá llevar adelante en el ámbito del Senado, el que deberá constituirse en Corte de Justicia en caso de que se admita la acusación por parte de esta Cámara de Diputados en la sesión de hoy.

Veamos. El Artículo 141 de nuestra Constitución reza textualmente, que: “Presentada la denuncia, pasará sin más trámite a la Comisión de Investigación... –esto se produjo conforme lo que obra en el expediente, cuya copia tengo a mi izquierda, a fojas 9–. Dicha comisión tendrá por objeto –dice la Constitución– investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, teniendo para ese efecto las más amplias facultades.”

*04S

Este mandato de la Constitución, señor Presidente, la Comisión, en pleno, en fecha 23 de noviembre, con la firma de todos sus miembros, lo dejó expresamente consignada en el Acta en el Punto 1, que dicha Resolución de la Comisión fue

formalmente notificada al Vocal investigado conforme foja 58/59, notificación a la cual ya me voy a referir.

Siguiendo el análisis del texto constitucional, es el Artículo 142 el que nos da los recaudos para garantizar la defensa en esta instancia de investigación la que – repetimos– no es la del juicio que se desarrollará eventualmente, si esta Cámara así lo entiende, ante el Senado.

Así, este Artículo 142 de la Constitución exige: “El acusado tendrá derecho de ser oído por la Comisión de Investigación...” mandato, señor Presidente, que la Comisión cumplió; primeramente, como dije, al establecerlo en el Acta de fecha 23 de noviembre, y se lo hizo saber al denunciado como vimos mediante las notificaciones respectivas de fojas 58/59 e incluso la notificación obrante a fojas 51 porque también, señor Presidente, el Vocal fue notificado como funcionario público que es sujeto de investigación en el lugar donde desempeña o desarrolla sus actividades como tal, es decir, en el Palacio de Justicia.

Lo notificamos, pero al no expresar aquella voluntad el magistrado en el plazo otorgado fue la propia Comisión la que debió posteriormente fijar una fecha e invitarlo a asistir, conforme el Acta Nro. 16 de fojas 83/84 y notificada según fojas 86 y vuelta. Prosigue el artículo diciendo, sobre el derecho del denunciado –leo textualmente la Constitución, ¿qué otra facultad tiene la comisión?– “... de interpelar por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos de descargo que tuviere.”

Ahora aclaramos, lo primero, interpelar a los testigos, no ocurrió puesto que no se produjeron testimoniales, y los documentos de descargo los presentó el denunciado en forma extemporánea, lo hizo el 5 de diciembre de 2016, y la Comisión dispuso igualmente su admisión por Acta Nro. 19 del mismo día. Finalmente el artículo dice, leo textualmente la Constitución: “Tendrá también el deber de contestar a todas las preguntas que la comisión le dirija respecto a la acusación.”

Aspecto este último, señor Presidente, que revistiendo no una facultad del funcionario investigado sino, a decir verdad y leyendo el texto constitucional, se transforma ya en un deber si ha hecho uso de su derecho de asistir a que lo podamos escuchar, un deber que el constituyente le impone al denunciado. Éste, es decir, el denunciado, en la reunión de fecha 1º de diciembre, vale aclararlo, no respondió directamente o lo hizo con evasivas, conforme obra en la versión taquigráfica que obra en el expediente que nos encontramos tratando puntualmente a fojas 231 a 280.

Finalmente, el Artículo 143 en lo que respecta al trámite nos impone un plazo para emitir el informe al decir, leo textualmente la Constitución: “La Comisión de Investigación consignará por escrito todas las declaraciones e informes relativos al proceso y terminado que haya su cometido, pasará a la Cámara, con todos sus antecedentes, un informe escrito en que hará mérito de aquéllos y expresará su dictamen en favor o en contra de la acusación. La Comisión de Investigación deberá terminar su diligencia en el perentorio término de treinta días.”

Plazo que, como vemos, señor Presidente, ha sido respetado en la interpretación que esta Comisión hizo de que los días corridos tal cual como se consignó en el Acta de fecha 23 de noviembre al establecer algunas pautas del procedimiento conforme punto 4 f) del Acta y al reafirmarse en el Acta Nro. 19 de fecha 5 de diciembre de 2016 por los argumentos allí vertidos por la Comisión, los cuales lo damos por reproducidos porque incluso hasta públicamente reforzamos este argumento que la Comisión entendió, porque hicimos una interpretación del texto constitucional formulándolo en orden al contexto de la Constitución. La Constitución de los entrerrianos cuando expresamente pretende el constituyente consignar que los días se consideren hábiles así lo establece, en su defecto los días, por el principio general del derecho, deben considerarse corridos y así lo entendió esta Comisión y así lo cumplió y se lo notificamos formalmente al denunciado investigado.

Como vemos, todos los preceptos constitucionales se hallan formalmente cumplidos. Repasemos ahora los pasos que se dieron hasta el momento para reafirmar la idea de que no se ha conculcado el principio de defensa del denunciado.

Presentada la denuncia, como dije, el 14 de noviembre de 2016 por Mesa de Entradas ante esta Honorable Cámara de Diputados por parte del denunciante, doctor Reggiardo, la denuncia, que por otra parte tomó estado público, en forma casi inmediata, señor Presidente, es girada a esta Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento al día siguiente. Repito, ingresó el día 14 y al día siguiente, el día 15, ingresó formalmente a la Sala de Comisiones. Es decir, que se cumplió estrictamente con el mandato constitucional establecido en el Artículo 141.

Al día siguiente de su giro a Comisión, en fecha 16 de noviembre, la misma, es decir la Comisión, se reúne y se aboca inmediatamente al tratamiento, con la finalidad de abordar en forma inmediata un tema que consideramos tan importante, desde lo institucional como así también ser debidamente diligenciado en el plazo de 30 días que

ya comenzaban a correr desde la formulación ingresada a la Cámara de Diputados el día 14.

En fecha 23 de noviembre, es decir una semana después, convocada al mismo efecto la Comisión y habiendo en los días previos los miembros integrantes de la misma evaluado el escrito que denunciaba el mal desempeño del señor Vocal, todos los miembros reunidos resuelven en forma unánime la admisibilidad de la denuncia y la apertura de la investigación. Disponen entonces la notificación, o dispusimos, perdón, la notificación de la denuncia con copia al Vocal, doctor Carlos Chiara Díaz, y se le otorga un plazo de seis días corridos a partir del día siguiente a que sea notificado para que comparezca y ejercite su defensa, incluso ofreciendo prueba. Remarco esto, y más adelante vamos a reafirmar la importancia de esto.

Además se le hace saber que se lo invita a que manifieste la intención de ejercer el derecho o no, de ser oído en el seno de la Comisión. De modo tal que no sólo se obró con clara diligencia, sino que, además, para salvaguardar la garantía de defensa, se dispone la inmediata notificación, la que se efectúa y materializa, como dije hoy, tanto en el domicilio real del magistrado aquí, en la ciudad de Paraná, y también en el Palacio de Justicia donde desempeña su condición de funcionario público, juez del Superior Tribunal.

*05N

Este último aspecto fue cuestionado, es decir la notificación, fue cuestionada en su legalidad en forma confusa y sin ningún asidero argumental por parte del Vocal, cuando sostuvo en su primer escrito y también en oportunidad de oírlo la Comisión, que no fue notificado correctamente; aunque aquella observación de nulidad dejó de ser insistentemente planteada ya en el escrito de descargo a fojas 281/304, que presentó ya con asistencia letrada.

Es menester señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación en su Artículo 74º define el domicilio legal, entre ellos de los funcionarios públicos, el lugar en que deben cumplir sus funciones, dándole categoría de presunción que no admite prueba en contrario. Reforzamos este concepto para que quede bien en claro que fue notificado en su domicilio real y a su domicilio legal, que de acuerdo a las normas generales del Derecho Civil se considera que es el domicilio donde debe cumplir sus funciones.

Pero volvamos, señor Presidente, al punto de lo que dispuso la Comisión en el Acta Nro. 15 de fecha 23 de noviembre. En este acto, con la finalidad de otorgar las más

amplias garantías al Vocal, dispusimos no solo –como dije– correr traslado y dar un plazo para que pueda defenderse, sino también para que ofrezca prueba, aspecto este último que fue concedido por la Comisión a pesar de no resultar una exigencia emergente del texto constitucional en esta etapa investigativa.

Inclusive se hizo saber que se le comunicaría cualquier medida de prueba, lo que también se cumplió debidamente tal como lo refleja el contenido de la Cédula de Notificación de foja 58. Es decir, le hicimos saber al señor Vocal que podía ofrecer prueba, formalizar su descargo, y también lo invitamos para que asista, si así lo entendía, a la Comisión.

Por lo tanto el doctor Chiara Díaz, no sólo no ejerció estas facultades que la Comisión le confirió notificándole fehacientemente, pues dejó vencer el plazo otorgado, sino que tampoco demostró interés alguno en tomar contacto con el expediente para merituar el contenido de los oficios librados en el Acta que lo dispuso. Fue recién en fecha 5 de diciembre, y luego de haber concurrido a la Sala de Comisiones a ser escuchado, que cuestiona algunas pruebas y también propone otras a lo que la Comisión le responde por Acta de fecha 5 de diciembre, notificada el mismo día, haciendo lugar parcialmente a su pedido.

Va de suyo, señor Presidente, que el magistrado contó con la posibilidad de tener acceso al contenido del expediente y su consecuente seguimiento, desde el mismo momento en que se lo notificó, 24 de noviembre conforme Cédula obrante a fojas 58/59, de modo, señor Presidente, que pudo ir tomando contacto con cada uno de los oficios que la Comisión iba recepcionando puesto que los mismos fueron contestándose casi en su mayoría en el plazo que la Comisión consignó, conforme lo dispuesto por el Acta Nro. 15, Punto 4, ítem c), de fecha 23 de noviembre.

En las cuestiones de trámite o de procedimiento, señor Presidente, es bueno hacer esta aclaración. En el Juicio Político debe diferenciarse claramente lo que acontece aquí en la Cámara Baja y lo que eventualmente ocurre en el Senado. A la Cámara de Diputados le corresponde, en la primera etapa, decidir, previa investigación –como lo hicimos– si hay causa de responsabilidad y en consecuencia deducir la acusación, mientras que en el Senado se desarrolla, si se da lo primero, el juzgamiento.

Si bien en más de una oportunidad se ha utilizado la comparación con el proceso penal para explicar nuestra función como Cámara de Diputados, al decir por ejemplo que la etapa prescripta por los artículos mencionados hasta el momento, 140 a 145 de la

Constitución, son una suerte de formación de sumario, es decir lo que en su momento acá, en Entre Ríos, se denominaba en el proceso penal la parte instructoria, o investigación preliminar en el nuevo proceso penal provincial, y que la etapa en el Senado corresponde al plenario, donde la Cámara de Diputados, o su representación, que es la Comisión de Acusación que habla el Artículo 146, actúa como fiscal acusador, es dable entender que aquella suerte de analogía con el proceso penal es un tanto relativa y no del todo apropiada, porque aunque puede permitir interpretar ciertos aspectos del proceso, implica una simplificación excesiva ya que omitiríamos considerar la base política e institucional del juicio político, que lo hace sustancialmente diferente del proceso penal.

Ello está demostrado, señor Presidente, en este prolijo y minucioso procedimiento que hemos intentado objetivamente llevar adelante; proceso, y lo decimos con toda modestia que comparado con los antecedentes parlamentarios que la Cámara que integramos posee, ésta nunca desarrolló con tal rigurosidad técnica y política lo que nosotros intentamos hacer y creo que lo hicimos.

Pero este procedimiento “político”, tiene sus alcances propios que lo separan, como dije, del procedimiento penal, puesto que no solo –como ya hemos dicho– está constitucionalmente reglado, sino que obviamente exige una decisión con mayoría y quórum calificado, como usted hoy hizo referencia acerca del quórum cuando comenzó la sesión, para la declaración de la promoción de la causa de responsabilidad y deducir así la acusación, necesitando de un expediente parlamentario, como es el que tenemos, que está en el ingreso a este recinto todos los antecedentes, se necesita de discusiones de comisión, del debate en el pleno del recinto en donde estamos tratando hoy el dictamen. Quiero decir con todo esto, queremos decir en el dictamen, que existe una marcada diferencia entre el proceso de naturaleza “judicial”, con este proceso de naturaleza esencialmente “política”.

Lo que sí puede guardar cierta analogía es que en esta instancia, o etapa del proceso en la Comisión de Investigación que integramos, tenemos por objeto determinar la existencia de uno o varios hechos que encuadren en algunas de las causales previstas en el Artículo 140 que el constituyente de 2008 incorporó textualmente. En el caso que nos ocupa, el del “mal desempeño”; podemos en este aspecto entonces trazar un paralelo con el proceso criminal, pero reiteramos que no conviene abusar del mismo porque las diferencias de carácter y fin jurídico en cada uno de ellos, no permiten

trasladar la mecánica y automáticamente los institutos y soluciones de uno hacia el otro.

¿Por qué decimos todo esto, señor Presidente, por qué hablamos de instituto? Porque ahora vamos a uno de los argumentos centrales de la defensa que hasta el momento ha esgrimido el Vocal denunciado, y aquí nos detenemos, porque incluso en materia de principios como el *non bis in ídem*, que es uno de los argumentos planteados, como dije, por el doctor Chiara Díaz, es discutida la plenitud de su aplicación en el ámbito parlamentario del procedimiento de juicio político.

Adviértase que si el Senado no dictó fallo, porque solo actuó la Cámara de Diputados rechazando o no aceptando el dictamen de la Comisión que promueve la acusación, Artículos 143 y 144 de la Constitución, no existe óbice para que revise su intervención y su resolución en un nuevo proceso que se intente con modificación de los elementos probatorios, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso Belluscio en el orden nacional que, luego de haber sido resuelto negativamente por la Cámara, en varias oportunidades y recurrentemente, la Cámara de Diputados de la Nación volvió a ser tratado sin que se aplicara tal principio.

La cosa juzgada que derivaría de la aplicación del principio del *non bis in ídem* que invoca el magistrado del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, resulta inaplicable como instituto en el caso que nos ocupa, puesto que además de las razones que se dieran en el párrafo anterior

*06G

donde citara el caso Belluscio, en oportunidad de rechazar la denuncia de juicio político en la sesión del 30 de agosto del corriente año, esta Cámara, por mayoría, decidió un rechazo in límine, es decir que la Cámara de Diputados mediante su Comisión de Investigación, también por mayoría, no abrió el procedimiento de investigación, no se merituaron los hechos atribuidos por los denunciantes puesto que simplemente no se investigaron.

Se entendió que la denuncia no reunía las condiciones o requisitos necesarios para que se declarara admisible, por lo tanto, y como ya lo expresara esta Comisión al reunirse, conforme Acta Nro. 19 de fecha 5 de diciembre, y voy a leer textualmente lo que dijo la Comisión y se le notificara al doctor Chiara Díaz, dijimos: "Respecto del planteo de aplicación parcial del principio *non bis in ídem*, se estima improcedente en el caso presente, toda vez que en oportunidad de la denuncia contra el doctor Chiara Díaz presentada con anterioridad y tratada en sesión del 30 de agosto próximo pasado se

produjo un rechazo *in limine*, sin abrirse la investigación, por considerarse básicamente que la denuncia no reunía requisitos necesarios para instar el proceso de juicio político siendo, además de imprecisa, dispersa en sus contenidos, sin existir en la misma una acusación clara, concreta y fijada en el tiempo, entre otras consideraciones que en la sesión se vertieron. Al no haberse ingresado siquiera a la investigación, mal puede sostenerse la aplicación de la cosa juzgada o *non bis in ídem* como principio base del debido proceso. Hubo lo que en materia judicial puede asimilarse a un archivo, que no causa estado y menos aún puede ser entendido como existencia –en aquel caso– de proceso sustantivo. Por las razones que exponen diferentes miembros de la comisión, en sentido similar, se resuelve el rechazo del planteo.” Leí textualmente, señor Presidente, lo que la Comisión estableció bajo acta firmada por todos los miembros que asistimos, y notificada formalmente al vocal.

Volviendo al análisis que este dictamen pretende hacer del procedimiento desarrollado, y con la finalidad de alejar cualquier idea que pretenda instalar que esta Comisión pudo haber transgredido el principio del derecho de defensa del doctor Chiara Díaz, resulta oportuno poner de resalto otro aspecto no menor en estas consideraciones.

Adviértase que la Comisión en reunión de fecha 5 de diciembre bajo Acta Nro 19, que fue notificada, le responde al magistrado que determinadas pruebas que ofreció y/o que pretendió impugnar, se consideraron improcedentes, con independencia de su planteo extemporáneo. Esto fue así entendido por la Comisión, por cuanto en la instancia en la que nos encontramos no resulta oportuno, ya que como dijimos la misma no deja de ser una investigación previa y por tanto preliminar, siendo la etapa del eventual juicio ante el Senado la apropiada para tal fin.

Conforme lo expresado en párrafos anteriores, queda claro que como Comisión hemos otorgado todas las facultades y posibilidades al denunciado de ejercer su defensa en esta instancia, incluso aún más que las que dispone el propio Artículo 142 de la Constitución. Y esta concepción de un procedimiento acusatorio que la sabiduría de los constituyentes del año 33 ya habían diseñado –porque como todos sabemos, los entrerrianos tuvimos el orgullo durante tantos años de tener una de las mejores constituciones en el contexto nacional, la del 33, que fue revisada por los constituyentes del año 2008, algunos de los cuales fueron legisladores que hoy nos honran con su presencia en este recinto–, se fortalece y refuerza con lo que el convencional del 2008 incorpora en el actual Artículo 152 de la Constitución, cuando establece que durante la

tramitación del juicio político “se deberá asegurar el derecho de defensa, con asistencia letrada”.

Resulta indudable que es ante el Senado y no aquí ante esta Comisión de Investigación, donde el acusado tendrá las más amplias facultades para defenderse, ofrecer pruebas, ofrecer peritos, impugnar las mismas, etcétera, puesto que el constituyente tuvo esa mirada orientada a vigorizar los principios del sistema acusatorio en este procedimiento, repito, de naturaleza eminentemente política.

Cita la Comisión en el párrafo siguiente, reforzando esta idea y textualmente de la versión taquigráfica de la Convención Constituyente de 2008, lo que el convencional Carlín decía haciendo referencia al agregado y a este artículo que los convencionales introdujeron. Decía el doctor Carlín: “La otra disposición está inserta en el Artículo 111 – que pasó a tener otro número en la Constitución de 2008–, porque no obstante el carácter político del juicio –dice Carlín–, conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay que preservar normas elementales que hacen al ejercicio del derecho de defensa del encausado. Y, en este sentido. se sostuvo en la comisión la necesidad de que en la tramitación del juicio político ante el Senado, se asegure el derecho de defensa del enjuiciado político, contando el mismo con asistencia letrada – que en esta instancia no es necesaria pero sí en el Senado–, o sea, ninguna norma reglamentaria puede impedir que el mismo cuente con este tipo de asistencia técnica que debe tener, a los efectos del ejercicio de sus funciones.” Y citamos el día y la fecha donde virtióestas expresiones.

Punto cuatro. Prueba Colectada. En este punto la Comisión ha hecho una minuciosa enunciación de todos y cada uno de los elementos de prueba que fue consignando la Comisión a lo largo de este proceso de los treinta días de trabajo; incluso me voy a permitir abreviar algunos de estos puntos solamente nombrándolos, en algunos sí me parece importante poner el acento porque guardan relevancia, como ya lo vamos a ir viendo más adelante.

Informe de la Universidad de Belgrano. Se informa que el doctor Chiara Díaz dictó clases en la Maestría y en la Especialización de Derecho Penal, en la asignatura Derecho Procesal Penal desde el 1º de julio de 2005 hasta el día 26 de junio de 2014, con una carga horaria anual de 46 horas. De la misma se desprende que se dictaba bajo dos modalidades: a) regular, por la que se cursaba los días jueves y viernes –vayamos teniendo en cuenta estos días de la semana: jueves y viernes–; b) intensiva, cuya

modalidad era el cursado los días viernes y sábados.

En el mismo sentido, se agregó en la contestación del oficio –agregó la Universidad de Belgrano– planilla de firmas del docente Chiara Díaz pertenecientes al primer semestre del año 2014.

Asimismo, a fojas 5 a 14 del informe, según foliatura perteneciente a la Universidad de Belgrano, se hace saber a esta comisión el detalle de las facturas emitidas y cobradas por Chiara Díaz, más los viáticos que también percibía, todo ello desde el año 2000 hasta el 2015. Hago especial acento en esto porque va a formar parte de todo el desarrollo y cómo vamos analizando la prueba colectada.

Informe de la Universidad Austral; continúo, Informe de la Universidad del Museo Social Argentino; Informe de la UBA. Actuaciones judiciales caratuladas “Del Valle Mac Dougall Liliana Mercedes y otro contra Chiara Díaz Carlos Alberto sobre filiación”, expediente Nro. 54819 del 2014; y el expediente judicial caratulado “Del Valle Mac Dougall Liliana Mercedes y otro contra Chiara Díaz Carlos Alberto sobre alimentos”, expediente 879/2015. Yo me detengo particularmente en esta prueba, señor Presidente, porque va a ser tenida en cuenta, y ha sido un elemento probatorio que esta Comisión ordenó oficiar al Juzgado Nro. 25 Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque entendimos que era necesario no evaluar el contenido en sí mismo de lo que se sustanciaba en estos expedientes que, como ya lo dijo esta misma Cámara por mayoría, pertenecían a la esfera íntima del magistrado, sino que queríamos tener los actos procesales y elementos de fechas que pueden arrojarnos luz acerca de la investigación que estábamos llevando adelante y la Comisión así lo entendió, como veremos más adelante.

Informe de la Anses, Informe del Superior Tribunal de Justicia, que fueron varios los informes que solicitó esta Comisión y que en tiempo y forma el Superior Tribunal de Justicia cumplió con todos y cada uno de los mismos, que fueron licencias y ausencias del doctor Chiara Díaz en los períodos que se solicitaron, de 2010 a 2016 inclusive; viáticos, planillas de viáticos, respuesta al Oficio Nro. 14, respuesta al Oficio Nro. 15, respuesta al Oficio Nro. 16, respuesta al Oficio Nro. 17. Informe comparativo que remitió la Presidenta del alto Cuerpo, la doctora Mizawak, que fue un informe de carácter voluntario que en fecha 5 de diciembre ingresó a la Comisión y el mismo fue agregado y puesto a disposición de las partes, y obviamente de los señores miembros de la Comisión.

*T07Cep

Informe de la Universidad de Salta; Informe de la Universidad Católica Argentina, UCA; Informe de la Universidad Católica Argentina Paraná; Informe de la empresa de transporte aéreo, Líneas Aéreas de Entre Ríos; Informe de la Universidad Austral; Informe de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Informe de la AFIP. De todos estos informes que estoy haciendo referencia están citadas en el dictamen las fojas respectivas que obran en el expediente.

Informe de la Universidad Nacional del Litoral; Informe de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Informe de la Universidad Católica de Salta; Informe del Superior Tribunal de Justicia en respuesta al Oficio Nro. 21, que fue agregado en forma posterior porque fue uno de los oficios librados por la Comisión en orden al ofrecimiento de la prueba que el señor Vocal investigado formuló y la Comisión –repito lo que dije anteriormente– pese a ofrecer la prueba en forma extemporánea, igualmente la Comisión admitió dicha prueba.

Informe del Superior Tribunal de Justicia sobre licencias de todos los Vocales durante período 2010-2016, posibilitándose el comparativo que requirió el denunciado en la defensa material. Recordemos que el denunciado aquel 1º de diciembre, aquí en el salón de los Pasos Perdidos, en varias oportunidades puso acento en la necesidad de sostener su defensa material comparando sus solicitudes administrativas de viáticos, licencias y solicitud de ausencia de la jurisdicción con el resto de los Vocales, lo que admitió esta Comisión; se ofició al Superior Tribunal de Justicia y éste en el nuevo plazo que le determinamos, lo contestó.

Informe del Superior Tribunal de Justicia de fecha 8 de diciembre, en el que remitió las actuaciones “Arralde, Juan Carlos contra Estado Provincial sobre Acción de Inconstitucionalidad...”, que también formó parte de las menciones que el doctor Chiara Díaz vertió en oportunidad de ser escuchado por esta Comisión.

Informe del Superior Tribunal de Justicia de fecha 10 de diciembre donde se remite informe brindado por la Secretaria del Superior Tribunal de Justicia, por parte de la doctora Elena Salomón por el que se informa licencias y ausencias durante el bienio 2014-2015 y año 2016, por parte de la doctora Claudia Mizawak.

Punto cinco. Análisis y valoración de la prueba producida. Comenzamos este punto, señor Presidente, con algo que textualmente voy a permitirme leer y está consignado en la versión taquigráfica de fojas 256 y que así lo consignamos en el

dictamen, que son expresiones del doctor Chiara Díaz cuando estuvo aquí en el salón de los Pasos Perdidos y lo pudimos escuchar. Dijo lo siguiente: "...creo que toda tarea, ya sea docente o de otro tipo, puede ser remunerada... el problema sería de que yo hubiera utilizado el dinero del Superior Tribunal, de la Justicia o lo que sea, y ese dinero se hubiera superpuesto habiéndoseme pagado a mí para que fuera a dar clase o una disertación... yo realmente tendría que ser un estúpido de cobrar dos veces por lo mismo."

Ahora bien, señor Presidente: tal como surge de los Anexos C1 al C11, que se encuentran en la mesa que está ingresando a este recinto, agregados con motivo del pedido de informes al Superior Tribunal de Justicia, al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos y en numerosos casos pasajes aéreos, por un total de 516 días en el período de 2006 a 2016, teniendo en el año 2006, 37 días de viático, en 2007, 33 días, en el año 2008, 53 días, en el año 2009, 41 días, en el año 2010, 53 días; en el año 2011, 45 días; en el año 2012, 60 días; en el año 2013, 47 días; en el año 2014, 60 días; en el año 2015, 48 días, y en lo que va del año 2016, 39 días, tomados hasta el mes de octubre próximo pasado.

Según surge del Anexo A1 de prueba, las ausencias totales de la jurisdicción en tal período son de 948 días, incluyendo esa cifra licencias con goce de sueldo, Artículo 7º del Reglamento 3 –que ya vamos a analizar– y autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción. No incluye períodos de ferias, ni otras licencias ordinarias, tal como surge de las planillas agregadas en el anexo mencionado.

Es decir, señor Presidente, que de esos 948 días en diez años –que son prácticamente dos años y medio– hay 516 días en los que se cubrieron viáticos, pasajes aéreos y traslados a aeropuertos con vehículo oficial, choferes, muchas veces viáticos para el chofer, y otros días en que se tomó licencia extraordinaria con goce de haberes pero sin viáticos. Toda la prueba acompañada refleja los números que estoy expresando.

Señor Presidente, a efectos de tomar una sencilla dimensión económica de lo dicho, si multiplicamos los días de viático por el valor actual que rige para los Vocales del Superior Tribunal de Justicia, que el mismo doctor Chiara Díaz nos ilustraba acá, significan el importe de 1.290.000 pesos, a lo que habría que sumar viáticos del chofer, pasajes aéreos que, por otra parte, son más caros que el viático mismo de 2.500 pesos, si estamos hablando de pasajes aéreos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y demás reconocimientos de gastos en cada caso como es el costo en combustible.

Los pedidos de licencia obran en cada uno de los expedientes identificados como Anexos B1 a B7 y, en general, señor Presidente, la argumentación para tales licencias o ausencias es la siguiente, toma acá la Comisión un ejemplo de la mecánica formal de solicitud que expresamente consignaba en las notas cuando el Vocal solicitaba. Textualmente leo lo que obra a fojas 19 del Anexo probatorio B6 : “...Le dirijo la presente a los fines de informarle que concurriré a la ciudad de Buenos Aires, por razones inherentes a mi Vocalía –expresión que la vamos a ver a lo largo de este dictamen– y a la reforma del sistema acusatorio. A tales efectos, partiré el próximo viernes 15 de diciembre de 2015 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas de las 10,30 hs. desde Santa Fe, regresando el sábado 15/5/15 (vuelo que parte desde Aeroparque a las 8,50 hs.) siempre con la misma empresa y hacia el mismo destino. Sírvase también derivarlo a los fines de la liquidación de viáticos, pasajes aéreos y concreción de mi traslado y regreso al aeropuerto de Sauce Viejo en un automóvil del Tribunal.”

Veamos, señor Presidente; el pedido citado que acabo de hacer referencia textualmente y a título de ejemplo, luego se amplió requiriéndose licencia para los días 13 y 14 de mayo de 2015, en que agregó un evento en Neuquén, según luce a fojas 21 del expediente. Pero lo que sí ocurre y señalamos específicamente este ejemplo, porque la modalidad constituye un patrón de conducta que se prolongó en el tiempo, cuando decimos un patrón de conducta, señor Presidente, va a advertir que esta expresión se reproduce a lo largo del dictamen porque es la expresión más acertada que esta Comisión ha encontrado para encuadrar la conducta del magistrado en todo este período de los últimos diez años que la Comisión entendió investigar en función de la denuncia.

T*08M

Repito, constituye un patrón de conducta que se prolongó en el tiempo, es que el evento en Neuquén seguramente existió, pero en Buenos Aires, el día 15 de mayo de 2015, lo único que ocurrió realmente es que el doctor Carlos Chiara Díaz se debió someter a una prueba de ADN en el juicio “Del Valle Mac Dougall, Liliana Mercedes y otro c/ Chiara Díaz, Carlos Alberto s/ filiación - ordinario”, proceso en el cual obran constancias a fojas 63/66 de la realización a las 15 horas, del test de filiación, análisis de ADN, encontrándose a fojas 64 la firma del aquí investigado.

Como se dijo anteriormente, el referido expediente fue agregado a la presente investigación, con el exclusivo motivo de conocer una de las razones de los reiterados viajes a Buenos Aires, invocando motivos atinentes a la Vocalía, encontrándose ajeno a

nuestros propósitos el fondo de la cuestión judicial.

Por eso, señor Presidente, claramente es uno de los casos que patentiza el proceder del magistrado investigado en estas actuaciones quien, argumentando razones oficiales, obtiene pago de haberes, viáticos y traslados para efectuar trámites que son exclusivamente particulares y debió costear por sí mismo, de su peculio. En dicha oportunidad, tomó licencia desde el 13 hasta el 16 de mayo de 2015. Recordemos, fue una de las preguntas que más incomodó al señor Vocal en oportunidad de reunirnos con él donde este Presidente le formuló esta pregunta porque entendíamos que claramente estaba consignada una solicitud del permiso y del viático correspondiente donde el día 13 de mayo de 2015 partía de la ciudad de Paraná para el 14 –que era jueves–, de Buenos Aires a Neuquén, asistir a ese congreso, pero quedó en el aire y sin justificar el día viernes 15 y el 16 que pide venir y se coteja del expediente judicial que ese viernes, sin actividad oficial, debió practicarse las pruebas de ADN.

Señor Presidente, a continuación, la Comisión en el presente dictamen, pretende hacer del análisis y valoración de la prueba, el enunciado de algunos casos, solamente de algunos casos, a los que el dictamen denomina “casos testigos” o representativos de esa expresión que se resume como patrón de conducta a la que hoy me refería. Solamente voy a leer algunos, incluso de los casos testigos que la Comisión determinó para no extendernos, pero queda por Secretaría el texto íntegro del dictamen.

Tomamos, como dije, los años 2006 en adelante. El 6 de febrero de 2006, surge del informe de la Universidad Austral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fojas 191 del expediente principal, que el día 6/2/2006 en el horario de 15.30 a 20.30 el denunciado dictó clases en la asignatura “Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal”.

Del cotejo con la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 1 bis y siguientes se desprende que al doctor Chiara Díaz se le pagaron viáticos del Superior Tribunal de Justicia con destino a la ciudad de Gualeguaychú ese mismo día, el 6/2/2006.

El 15/6/2006, surge del informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fojas 192/195 del expediente principal. que el día jueves 15/6/2006 en el horario de 17 a 20 el denunciado dictó clases de “Medios de Impugnación: La nueva Casación Penal”.

Del cotejo con la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 1 bis, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le pagaron viáticos del Superior Tribunal de Justicia con destino a la ciudad de Buenos Aires los días 14 al 16 de junio inclusive, los cuales se asignaron para que concurra en virtud de una invitación que se alega a fojas 10 del Anexo C1. Lo

que en realidad ocurrió es que tenía un compromiso por su condición de docente de la UBA.

El 7/12/2006, surge del informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fojas 192/195 del expediente principal, que el día jueves 7/12/2006 en el horario de 18 a 20 horas el denunciado dictó clases de “Las medidas de coerción y seguridad (Específica)”, y de 20 a 22 dictó clases de “Garantías Constitucionales y Proceso Penal”.

Del cotejo con la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 1 bis, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal con destino a la ciudad de Buenos Aires del 6 al 8 de diciembre, los cuales se pagaron para que concurra a Buenos Aires, en viático y licencia tramitados con otro motivo, no el de dar clase conforme fojas 18 Anexo C1.

En el año 2006 cobró la suma de –en el año 2006– repito, cobró la suma de 10.003,51 pesos en concepto de honorarios de la UBA, según surge del informe de la misma Universidad a fojas 195.

En ese año 2006, a su vez, percibió de la Universidad de Belgrano, honorarios docentes por 13.115 pesos pagados con cheques y viáticos por un total de 3.000 pesos, pagados en efectivo, según surge de fojas 202/203 y 209 del expediente principal. Queda claro que se ausentaba de la Provincia con viáticos, goce de sueldo y además, en esos días, sueldos y viáticos por su tarea docente.

En el año 2007, surge del informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fojas 192/195 del expediente principal, que el día jueves 6/12/2007 en el horario de 17.30 a 19.30 el denunciado dictó clases de “La Prueba Penal”, y el viernes 7 de diciembre en el mismo horario dictó clase sobre “Institutos principales del nuevo proceso penal bonaerense”.

Del cotejo con la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 1 bis, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal, con destino a la ciudad de Buenos Aires, del 6 al 8 de diciembre, los cuales se pagaron. Esto es importante, en el año 2007 cobró la suma de 15.203,93 pesos en concepto de honorarios de la UBA, según surge del informe citado anteriormente.

Así podemos citar casos del 10/4/2008, en este mismo sentido, casos del 28/08/2008, pero me detengo especialmente en este caso, donde dice: “Surge del informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fojas 192/195 del expediente principal, que el día jueves 28/8/2008 en el horario de 17.30 a 19.30 el denunciado dictó clases de

“Prisión Preventiva e Institutos Morigeradores. Eximición de Prisión. Excarcelación y Cese de Prisión”, y de 19.30 a 21.30 clases de “Garantías Constitucionales y Proceso Penal”.

Del cotejo con la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 2, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal de Justicia, con destino a la ciudad de Buenos Aires, del 28 al 29 de agosto, los cuales se pagaron.

En todos los casos del año 2008 tramitó y le fueron pagados viáticos y pasajes y cobró a su vez la suma de 11.659 pesos en concepto de honorarios de la UBA. A su vez, señor Presidente, de la Universidad de Belgrano, percibió durante 2008 la suma total de 25.582 pesos por honorarios docentes percibidos en cheque y 4.000 pesos en efectivo de viáticos, según surge del informe agregado a fojas 204 del expediente principal.

En el año 2009 tenemos similares ejemplos. Los doy por reproducidos. El 22/4/2009, 05/8/2009, repito, casos que la Comisión consideró como testigos, 19/11/2009.

En el año 2010, 4/11/10, surge del informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fojas 192/195 del expediente principal, que el día jueves –recordemos, jueves y viernes– 4/11/2010 en el horario de 17.30 a 19.30 el denunciado dictó clases de “Política Criminal y Reformas Procesales: hacia una nueva administración de justicia”, y de 19.30 a 21.30 “Garantías Constitucionales y Proceso Penal”.

*09S

Del cotejo con la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 5, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal con destino a la ciudad de Buenos Aires del día 4 al 5 de noviembre los cuales se pagaron con el fundamento del Artículo 7º del Reglamento 3, que refiere a licencia o autorización con o sin goce de sueldo para concurrir a congresos y jornadas científicas. En realidad lo que hizo el doctor Chiara Díaz es percibir por esa razón sueldos, viáticos y pasajes para dar clases, es decir, una tarea particular para lo cual percibía honorarios.

En el año 2010 cobró la suma de 15.274,73 pesos en concepto de honorarios de la UBA, obra en fojas 192/195, 38.768 pesos de la Universidad de Belgrano, más 4.000 pesos de viáticos en efectivo conforme fojas 205, 206 y 209.

Año 2011, caso testigo del 18/8/2011. Continúo con el año 2011, caso de la facultad de la UBA, 10/11/2011 donde al final de este caso surge, según el informe citado, en el año 2011 cobró la suma de 14.460,54 pesos en concepto de honorarios de la UBA y

también percibió de la Universidad de Belgrano 42.192 pesos por honorarios docentes pagados en cheque y 6.000 pesos de viáticos.

Año 2012, caso testigo del 12/4/2012. Otro caso testigo del 07/6/2012, que lo doy por reproducido. Otro caso testigo del 28/6/2012, que también lo doy por reproducido.

Año 2013, 4/4/2013, surge del informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fojas 192/195 del expediente principal, que el día jueves 4/4/2013 en el horario de 16 a 18 dictó “Medios de Impugnación”.

Del cotejo de la planilla de viáticos que obra en el Anexo A1 fojas 9, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos y pasajes de avión con destino a la ciudad de Buenos Aires desde el 3 al 5 de abril, los cuales se pagaron conforme el Artículo 7º del Reglamento 3. Ya nos vamos a referir más adelante puntualmente a este reglamento del Superior Tribunal, señor Presidente. Es decir, las razones invocadas para la licencia no coinciden con las actividades particulares que concurrió a desarrollar.

En el año 2013 cobró la suma de 4.069,80 pesos en concepto de honorarios de la UBA y 71.058 pesos por honorarios en cheque y 4.500 pesos de viáticos de la Universidad de Belgrano.

Caso testigo del 9/5/2013, lo damos por reproducido. Fue un caso en otro de las casas de estudio que el doctor Chiara Díaz se desempeñaba, esto es la Universidad del Museo Social Argentino.

Caso testigo del 23/5/2013, surge del informe de la Universidad del Museo Social Argentino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fojas 210 del expediente principal, que el día jueves 23/5/2013 tenía una carga de 2 horas y dictó clases sobre “Teoría General del Proceso”.

Del cotejo con la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 10, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos y pasajes con destino a la ciudad de Buenos Aires los días 23 al 26 de mayo, conforme al Artículo 7º del Reglamento 3, los cuales se reconocieron para que concurra a atender cuestiones inherentes a la Vocalía conforme fojas 34 y 35 del Anexo B4. El doctor Chiara Díaz expresó a fojas 34 del Anexo B4, que el motivo era celebrar reuniones académicas en la Universidad de Belgrano, en la UBA y en la Universidad del Museo Social Argentino, referidas a proyectos y leyes de reforma de la administración de justicia e instauración del Código Procesal Penal acusatorio y el nuevo Código Penal. Lo que exhibe, señor Presidente, es una clara contradicción con lo que obra informado por la propia universidad y también por las razones inherentes a la

Vocalía como argumentaba.

Obra informado a fojas 210 del expediente principal, que la Universidad del Museo Social Argentino le ha abonado sueldos durante el año 2013, primer semestre.

Año 2014, caso testigo del 4/4/14 y 5/4/14. La Universidad de Belgrano nos informa que surge de planilla obrante a fojas 199 del expediente principal que los días 4 y 5 de abril de 2014 dictó clases de “Derecho Procesal Penal”, obrando firma del denunciado Chiara Díaz en la planilla.

De dicha planilla de viáticos Anexo A1 fojas 11, se desprende que el doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal, con destino a la ciudad de Buenos Aires, del 3 al 4 de abril, los cuales se pagaron conforme al Artículo 7º del Reglamento 3 del Superior Tribunal.

Según surge, señor Presidente, se desprende de fojas 22 y 23 del Anexo B5, el denunciado solicitó autorización para ausentarse sólo el día jueves 3 y viernes 4, faltando de la jurisdicción sin autorización el día 5 de abril (ver planilla fojas 199).

En consecuencia se tomó licencia paga, con viáticos, para dictar clases invocando que iba a formarse. Que ya veremos que es la razón de ser de la licencia especial que otorga el Artículo 7º del Reglamento 3 del Poder Judicial de la Provincia.

Caso testigo fecha 24, 25 y 26/04/2014, de la Universidad de Belgrano, lo doy por reproducido.

Caso del día 15, 16 y 17 de mayo de 2014, también de la Universidad de Belgrano, el cual lo damos por reproducido.

Caso testigo 6 y 7 de junio de 2014, también de la Universidad de Belgrano, esto dice porque tiene una consideración especial, surge de la planilla obrante a fojas 199 del expediente principal que los días viernes 6 de 9 a 13 horas, y sábado 7 de 9 a 13 horas, del mes de junio de 2014 dictó clases de “Derecho Procesal Penal”, obrando firma del denunciado Chiara Díaz en planilla de la Universidad de Belgrano, señor Presidente, nos envió planillas adjunta en el informe donde está consignado la firma del profesor, doctor Chiara Díaz.

De la planilla de viáticos Anexo A1 fojas 11, se desprende que al Dr. Chiara Díaz se le liquidaron viáticos y pasajes con destino a la ciudad de Buenos Aires el día 5 y 6 de junio inclusive, los cuales se pagaron conforme –repito– al Artículo 7º del Reglamento 3 del Superior Tribunal.

De fojas 35 y 36 del Anexo B5, surge invocado por el doctor Chiara Díaz que el

día 5 de junio iría a la inauguración del Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y que el día 7 de junio se ausentó de la jurisdicción sin autorización. A las claras se evidencia que las razones invocadas para la licencia no eran tales.

Caso testigo del 26 de junio de 2014 en la Universidad de Belgrano, que lo doy por reproducido.

Caso 2015, del 4 de junio 2015, Universidad del Museo Social Argentino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo doy por reproducido.

*10N

Año 2016, ya un poco acercándonos a la fecha. 7 de junio de 2016, surge del informe de la Universidad del Museo Social Argentino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fojas 210 del expediente principal, que el día martes 7 de junio de 2016, día de Acuerdos en el Superior Tribunal de Justicia, dictó “Teoría General del Proceso”, carga horaria de 2 horas. ¿Por qué marco “día de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia”?, ya vamos a explicar más adelante la importancia que tiene esta cuestión.

Del cotejo con la planilla de viáticos, Anexo A1 fojas 13, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal de Justicia con destino a la ciudad de Buenos Aires los días 7 al 8 de junio, los cuales se pagaron conforme el Artículo 7º del Reglamento. Está claro que tal fundamentación es falsa, toda vez que no concurrió a ningún congreso o evento científico, sino a dar clases.

Vamos a decir algunos casos también que consideramos testigos, y que están relacionados con las actuaciones judiciales de filiación y alimentos que esta Comisión incorporó solamente con estos fines investigativos.

Año 2015, 3 de marzo de 2015, obra en fojas 46/47 en el expediente del Juicio de Filiación que fue agregado, señor Presidente, en copia certificada por la actuario del Juzgado Nro. 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo Civil y Comercial, tal cual como le pedimos en el oficio, surge que el señor Chiara Díaz estaba en la ciudad de Buenos Aires el 3 de marzo de 2015 porque está, y figura en dichas fojas, que ha firmado poder ante la escribana Florencia Puma, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poder para actuar en estas actuaciones; otorgó poder a un abogado a través de escritura pública que es un documento público y, en consecuencia, la fecha consignada en el mismo reviste carácter de fecha cierta.

Del cotejo de la planilla de viáticos, Anexo A1 fojas 12 y siguientes, se desprende

que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal de Justicia con destino a la ciudad de Buenos Aires los días 2 al 4 de marzo, los cuales se pagaron conforme el Artículo 7º del Reglamento 3.

A fojas 3 del Anexo B6, obra nota informe del Superior Tribunal de Justicia donde se expresa que ha viajado a la Ciudad Autónoma para el acto de apertura del Año Judicial de la Corte Suprema de Justicia, con liquidación de viáticos a tales fines.

Veamos este caso, fecha 29 de julio de 2015, señor Presidente. A foja 54 del Juicio de Filiación, surge que el doctor Chiara Díaz concurrió al Registro Civil de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectivizar el reconocimiento de su hija menor el 29 de julio de 2015.

A fojas 44, de Anexo B6, obra nota de Chiara Díaz donde solicita ausencia y licencia, con auto y chofer, partiendo el martes 28 a las 14 horas para regresar el 30 a las 13 horas, motivo: asistir a la Embajada de la India a gestionar la visa, que por otra parte la gestión de la visa entendemos que es un trámite personal independientemente que a la misma la necesite para viajar a algún congreso a perfeccionarse, eventualmente, conforme el Artículo 7º del Reglamento 3 del Superior Tribunal.

Del cotejo con la planilla de viáticos, Anexo A1 fojas 1 bis, se desprende que al doctor Chiara Díaz se le liquidaron viáticos del Superior Tribunal con destino a la ciudad de Buenos Aires, del 28 al 30 de julio, los cuales se pagaron conforme al Artículo 7º del Reglamento.

Caso testigo, también refiriéndonos al cotejo de la prueba brindada por el Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia en sus oficios, cotejado con los expedientes judiciales de referencia, de fecha 9 y 10 de noviembre del año 2015. Del Juicio de Filiación surge que el doctor Chiara Díaz extendió también poder ante la escribana Florencia Puma en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fecha 9/10/2015.

A fojas 65, 66, 67 y 68 de Anexo B6 obra probado que el doctor Chiara Díaz concurrió el día 9/10/2015 a la ciudad de Concordia para concurrir al Acuerdo del Superior Tribunal, y el día 10 solicitó autorización, con chofer y viáticos, para realizar “trámites de su Vocalía” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Caso testigo del 15/5/2015, caso testigo al que ya hacía referencia, es el caso del hisopado de la prueba de ADN que se realizó el doctor Chiara Díaz el 15 de mayo de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que ya me refiriera.

Señor Presidente, claramente como dijimos al comienzo de la exposición de estos

casos emblemáticos, la mentira surge de la prueba acompañada; su única razón de permanencia en Buenos Aires, en este último caso, fue la prueba de ADN, es decir, un motivo estrictamente particular.

Para culminar la exposición sobre estos casos, hablaremos de uno que exhibe a todas luces la inconducta en la actuación del Vocal denunciado.

Tal como obra en el Anexo A2, Expediente Administrativo 2.598, prueba agregada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos como Expediente Nro. 41.714, caratulado: “Presidente de feria doctor Chiara Díaz – chofer Borrás, días 23 y 24 de enero de 2014, Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre viáticos”, así lo caratuló; el Vocal denunciado se autoadjudicó, siendo Presidente del Superior Tribunal de Feria, viáticos para el día 24 de enero de 2014, invocando que tendría que ausentarse.

Aclaro que esta cuestión si bien se deslizó en el análisis de la sesión pasada cuando hubo un rechazo in limine, que ya explicamos el contenido del rechazo, este miembro informante hizo una consideración al respecto, pero obviamente la consideración que hicimos fundamentalmente del rechazo in limine de la denuncia que oportunamente se le formuló al Vocal Chiara Díaz, hicimos un rechazo por considerar que esa denuncia que era impropia en los términos de la calificación que pretendía darle al denunciante, de lo imprecisa que era, en definitiva que no guardaba el cumplimiento de tal forma, por lo tanto la rechazamos in limine, nos encargamos fundamentalmente a desechar aquella presentación porque apuntaba a la vida privada del magistrado y así lo entendió la mayoría de la comisión.

Este hecho que fue deslizado, sin ninguna prueba concreta por aquellos denunciantes de la vez pasada, señor Presidente, fue un hecho aislado y lo consideramos , pero lo consideramos –repito– en otro marco que no es el de hoy, hoy lo estamos considerando en un marco excesivamente, por los elementos probatorios, que podemos afirmar un posición y cierto juicio que amerite la calificación que hoy le estamos dando.

En esa oportunidad el doctor Chiara Díaz, obra a fojas 3, leo textualmente, hace este pedido, estando a cargo de la Presidencia en feria. Dice que debe ausentarse: “...a una reunión fijada en forma imprevista para esta tarde, en el Ministerio de Justicia de la Nación de la ciudad de Buenos Aires ...para entrevistarme –dice– con los doctores Julio C. Alak y Montes por cuestiones relativas al nuevo Proyecto del Código Penal de la Nación presentado por el doctor Zaffaroni y equipo”. Nota, como dije, firmada por el

doctor Chiara Díaz que encabeza ese expediente, y que esta a fojas 3.

Partió Chiara Díaz con viáticos autootorgados, dejó el Superior Tribunal de Feria que presidía, mandó liquidarse viáticos a él y a su chofer, Borrás, situación que motivó, señor Presidente, culminada la feria, la preocupación evidente de otros vocales que toman intervención y advierten esa irregularidad, como el caso del doctor Castrillón, Vocal del Superior Tribunal, que lo hace a fojas 9 y del doctor Juan Smaldone, que lo hace a fojas 17.

*11G

Leo textualmente la objeción que el doctor Smaldone formula en ese expediente administrativo donde se desentrañaba esta cuestión. Dice el doctor Vocal Smaldone: "...patentizada una clara conducta impropia de parte del señor Vocal doctor Carlos A. Chiara Díaz. Esto así porque en la ocasión figurada en autos, actuó desprovisto de las elementales cualidades exigidas por las circunstancias de tiempo y lugar. Sin autorización ni concesión de licencia previa –previstas en los reglamentos vigentes– se alejó de la jurisdicción provincial y dejó desintegrado el Tribunal de Feria que presidía". Y termina Smaldone diciendo: "Pero por si fuera poco, sin miramiento, dispuso para él mismo de bienes del Poder Judicial."

Culminó la cuestión en el mes de abril de 2014, más precisamente el día 23 de ese mes, en que el doctor Chiara Díaz depositó los viáticos autoliquidados que sus pares y el Procurador General de la Provincia, doctor Jorge Amilcar García, determinaron que debía devolver.

Señor Presidente, en esos hechos, en primer lugar, ha quedado demostrado en autos que el doctor Chiara Díaz a lo largo de los últimos 10 años tuvo como práctica habitual solicitar autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción requiriendo, en la inmensa mayoría de los casos, la liquidación de viáticos por cada día que se encontraba fuera de la ciudad de Paraná, y gastos de traslados ida y vuelta. Eso ha quedado palmariamente manifestado con toda la información a que viniera haciendo referencia, que son todos los anexos que la Comisión dispuso por separado no agregarse al expediente para no dificultar su trabajo y lectura.

Por otro lado, del estudio de esa documentación se advierte que en la mayoría de los casos el destino del juez, como hemos visto, ha sido la ciudad de Buenos Aires mientras que los días en los que ha percibido esos viáticos se corresponden preferentemente a los jueves y viernes.

Sin perjuicio de ello, no es vano reprochar la actitud de un juez, de la máxima jerarquía judicial que existe en la Provincia, que, a sabiendas de que no le correspondía percibir viáticos más gastos de traslados para realizar actividades de su vida privada, docencia, sistemáticamente los solicitó y cobró esos fondos y simultáneamente cobró otros fondos, en concepto de honorarios, sueldos, etcétera, para desarrollar las mismas tareas e incluso, en no pocas oportunidades, cobró viáticos dobles para realizar un único e idéntico traslado. Evidentemente estamos en presencia de actitudes que distan mucho de las cualidades de un buen magistrado, como se ha sostenido en la denuncia.

Consideramos oportuno destacar que no existe ningún pedido de licencia ni viáticos formulado por el doctor Chiara Díaz en el que haya deslizado señal alguna de que percibiría contribuciones económicas, honorarios y viáticos, pagadas por distintas universidades para que realice las actividades docentes. Seguramente, señor Presidente, si el doctor Chiara Díaz informaba esa situación en el seno del Superior Tribunal, éste no le hubiera liquidado las licencias, viáticos y traslados, e incluso puede afirmarse que probablemente tampoco lo hubiera autorizado a ausentarse de la jurisdicción.

Veamos lo siguiente. Algo así ocurrió recientemente en las actuaciones administrativas mediante las cuales el Superior Tribunal de Justicia le concedió licencia, sin goce de sueldo, para que el juez realizara sus actividades académicas durante el período comprendido entre el 19 y el 29 de octubre de 2016; eso obra a fojas 2 del Anexo A3. Esa es la única oportunidad hallada en toda la documentación, además del ejemplo expuesto en párrafos anteriores en que se le obligó a devolver los viáticos, en el que el Superior Tribunal le descontó de su sueldo los días no trabajados por no tener justificación de sus ausencias.

Más adelante veremos en un caso encontrado en que el juez, al momento de solicitar permiso para ausentarse el jueves 31 de octubre de 2013, anotició que percibiría pasajes y estadía abonados por la Universidad Nacional de Mendoza, por lo que la respuesta del Superior Tribunal fue autorizarlo a viajar pero no le abonó los viáticos ni los traslados, conforme fojas 68 del Anexo B4.

Por ejemplo: en el año 2008 cobró viáticos correspondientes a 52 días. En el 2009, 50 días. En el año 2010 Chiara Díaz percibió 52 días de viáticos, en tanto que en el 2011 cobró viáticos 46 veces, 60 días de viáticos tuvo en el 2012, 49 en el 2013, 62 en el 2014 y 61 en el 2015; etcétera. En ninguno de esos casos informó al Superior Tribunal de Justicia que percibiría por esas tareas otras contribuciones económicas.

Es decir, en ninguno de esos casos informó al Superior Tribunal que percibió los honorarios y viáticos que dan cuenta los siguientes informes.

El informe que proporcionó la Universidad de Belgrano da cuenta de pagos mensuales y habituales que se le efectuaban al doctor Chiara Díaz cada vez que asistía a dar clases a esa facultad. De hecho, de allí surge que el juez emitió unas 400 facturas a nombre de esa Universidad. Ese informe también certifica que la Universidad de Belgrano le pagaba habitualmente viáticos al doctor Chiara Díaz para que éste se traslade desde Paraná a la ciudad de Buenos Aires. La impugnación que del informe de la Universidad de Belgrano realizara el denunciado, aparece como absolutamente infundada, siendo pertinente en esta etapa considerar plenamente dicha prueba, dado que luce no solo detallada y verosímil, sino porque contiene planillas con firmas y enunciados de puño y letra del doctor Chiara Díaz.

El informe de la Universidad Austral certifica que esa casa de altos estudios le pagó los honorarios pactados como contraprestación del dictado de clases durante el año 2006. El informe perteneciente a la Universidad del Museo Social Argentino afirma lo propio en los años 2013, 2015 y 2016. El informe de la UBA da cuenta del dictado de clases de 2006 a 2013. En el Informe del Sistema Integrado Previsional Argentino se advierten todos los movimientos en la cuenta del doctor Chiara Díaz desde el año 1994 hasta el año 2016, inclusive.

La documentación aportada en autos, en esta etapa investigativa, constituye prueba suficiente para demostrar que, en reiteradas oportunidades, el doctor Chiara Díaz dijo una cosa al Superior Tribunal de Justicia, que solicitaba autorización para ausentarse y recibir los emolumentos de viáticos y gastos de traslados por razones vinculadas a las funciones de magistrado, o relacionadas a la Vocalía, o al Superior Tribunal de Justicia, o al Poder Judicial pero, señor Presidente, en realidad el magistrado se ausentó para realizar otras tareas distintas a las alegadas, por las que, como vimos y continuaremos analizando, también percibió compensaciones dinerarias e incluso, a veces, también viáticos.

Otros casos. Así, a más de los ejemplos enunciados ya, se ha comprobado que desde el 12 hasta el 14 de junio de 2013 el Superior Tribunal le autorizó y le pagó los viáticos y traslados para concurrir a San Luis en su condición de Vocal del Superior. No obstante eso, el 13 de junio dio clases en la Universidad de Belgrano y cobró los viáticos que esa Universidad le pagó en efectivo; ver comprobante 23.635 obrante a fojas 14 del

informe de la Universidad de Belgrano.

El 6 de octubre de 2011 pidió permiso al Superior Tribunal para que le pague viáticos más pasajes para asistir al Ministerio de Justicia de la Nación por asuntos vinculados a la Vocalía, y ese mismo día dictó clases en la Universidad de Belgrano a la que le emitió la factura número 317 por cobro de honorarios: 3.660 pesos cobrados en efectivo ese día, conforme surge del comprobante obrante a fojas 11 del citado informe.

El 14 de abril de 2013, como lo mencionáramos ut supra, fue comisionado por el Superior Tribunal para asistir a dos reuniones: una en la UBA y otra en la Universidad de Belgrano, pero el magistrado omitió decir que fue a esas facultades pero a dictar clases conforme surge de los informes elaborados: ese día cobró 4.069 pesos en la UBA y 5.402 pesos en la Universidad de Belgrano por el dictado de clases en ambas casas de estudios.

*T12Cep

Señor Presidente: párrafo aparte merece mencionar otra cuestión que surge con contundente evidencia de la información proveniente de los requerimientos formulados a distintas universidades, toda vez que en tales documentos se advierte que Chiara Díaz se comprometía a cumplir con la agenda propia de cada uno de los cursos, jornadas y capacitaciones de grado y posgrado, mucho tiempo antes de obtener las autorizaciones particulares que luego pediría en forma particular y parcial.

¿Qué queremos decir con esto? Que Chiara Díaz al asumir esos compromisos con distintas casas de altos estudios, ya proyectaba, señor Presidente, su ausencia del despacho de magistrado con una antelación no inferior a los seis meses, omitiéndole dicha información al Superior Tribunal. En otras palabras, seis meses antes, Chiara Díaz ya sabía que la mayoría de los jueves y/o viernes del siguiente semestre no iba a poder concurrir a su despacho en la Sala Penal, porque ya se había comprometido con distintos centros de capacitación a respetar sus programas de estudios durante días hábiles judiciales entrerrianos.

Si uno repasa los informes provenientes de las universidades puede apreciar a simple vista la ambiciosa agenda académica a la que cada año estuvo comprometido Chiara Díaz, prácticamente –como lo dijimos– dos días hábiles de la semana durante todas las semanas del año en los últimos cinco años, Chiara Díaz prefirió dedicarse a asuntos académicos por encima de los judiciales.

Como ya dijéramos, en junio del año 2012, por ejemplo, señor Presidente, Chiara Díaz se reservó sólo ocho días hábiles para ir a su despacho en el Superior Tribunal. Todos los restantes días hábiles los comprometió a otras actividades.

Al respecto, cabe afirmar que tales compromisos no eran informados por Chiara Díaz al Superior Tribunal con esa antelación, seis meses por ejemplo, sino que luego, ya adentrado el cronograma estudiantil, el juez iría a solicitar los permisos para ausentarse y los viáticos individual y semanalmente en cada oportunidad. Los permisos solicitados por el juez, para dar clases en una jornada una semana, en un posgrado en otra, en una materia de grado en otra, etcétera, habitualmente fueron formulados en términos precisos e individuales sin que de ellos se pueda desprender que, en realidad, se trataba de compromisos asumidos con distintas casas de altos estudios mucho tiempo antes de obtener los permisos del Superior Tribunal.

Es cuestionable que el magistrado se haya comprometido con sendas Universidades antes de pedir la autorización del Superior Tribunal, e incluso antes de informarle al Superior Tribunal que su asistencia regular a la Sala Penal se podía ver seriamente comprometida con tales compromisos.

Señor Presidente: se trata, en definitiva, de definir si tales actitudes son propias de un buen magistrado o si, por el contrario, estamos en presencia de conductas evasivas y omisivas que perjudican un buen desempeño; incluso más y como veremos más adelante, un abuso eventual de las normas que regulan las licencias.

En muchas partes hablamos de las mentadas licencias que el señor Vocal pedía en orden al Artículo 7º del Reglamento 3 del Poder Judicial. El Poder Judicial entrerriano tiene establecido a través del Reglamento 3 un régimen especial que regula el otorgamiento de licencias para todo el personal de dicho poder, incluyendo a los magistrados y funcionarios. Del informe que como prueba obra identificado como Anexo A1, que fue solicitado por esta Comisión, surge claramente que el doctor Chiara Díaz solicitó en innumerables oportunidades las licencias, de las que en profusa cantidad gozó, y que fueran imputadas al Artículo 7º de dicho Reglamento. Es decir, la mayor cantidad de licencias solicitadas y concedidas al doctor Chiara Díaz, investigadas y acreditadas en toda esa documentación, fueron en función del Artículo 7º del Reglamento 3.

¿Qué dice el Artículo 7º? El Artículo 7º dispone que “el Superior Tribunal de Justicia podrá acordar licencia o autorización –con o sin goce de sueldo o con medio

sueldo—, siempre que se garantice la normal prestación de las funciones judiciales y la actividad de los organismos respectivos, a magistrados, funcionarios y empleados con título profesional para concurrir a congresos, jornadas científicas, programas o cursos de actualización, especializaciones, maestrías y doctorados y/o para realizar viajes de estudios en el país o en el extranjero, por el plazo que se acredite como necesario, quedando el mismo sujeto siempre a la revocación cuando las circunstancias impongan la presencia del interesado en su lugar de trabajo...." y continúa el artículo.

Ahora bien, de un análisis exegético de dicha norma, se puede extraer en primer lugar que la razón tenida en cuenta para el otorgamiento de dicha licencia está constituida por la concurrencia a distintos eventos y actividades que impliquen recibir capacitación, capacitarse como funcionario judicial, no capacitar a terceros.

En la misma inteligencia debe entenderse, por ejemplo, la licencia con goce de haberes establecida en el inciso d) del Artículo 5º del Reglamento 3, el cual dispone que se les podrá conceder licencias con goce de sueldo de hasta veinte días en el año, a quienes cursen estudios en establecimientos educacionales oficiales o privados, reconocidos por el Estado, para rendir examen, concurrir a seminarios o trabajos prácticos, por plazos que no excedan de cinco días por cada vez, debiendo los peticionantes acreditar la causal invocada al solicitar la licencia o inmediatamente de tomar servicio, mediante certificación expedida por la autoridad que corresponda.

Señor Presidente: la razón de ser de los referidos beneficios que el Reglamento 3 reconoce a todos los miembros del Poder Judicial, reside en la permanente actualización y formación que se desprende de la naturaleza misma de la función que ejercen especialmente los magistrados y funcionarios judiciales. Es decir, es una norma que les da facultades de permisos y licencias para que se capaciten por la naturaleza misma de la función jurisdiccional que tienen los jueces.

Cabe recordar aquí al maestro Eduardo Couture que advertía que el derecho se transforma constantemente y aconsejaba seguir sus pasos. Claramente el hecho de concurrir a dictar clases en forma remunerada no puede constituirse en la razón de una licencia extraordinaria con goce de sueldo.

Se encuentra acreditado en este expediente que el doctor Chiara Díaz, al menos durante el período indicado, dictó clases, tanto de grado como de posgrado, en distintas universidades –tal como surge de los informes obrantes en estas actuaciones–

solicitando en tales ocasiones licencia con goce de haberes y autorización para ausentarse de la jurisdicción por razones imputables al Artículo 7° del Reglamento 3.

En relación a esto último es oportuno resaltar la repetitiva mención en dicha expresión, cuando pedía esas licencias: “cuestiones vinculadas a mi Vocalía”, a la que acudía en esas solicitudes de licencia. Esta conducta, que adquiere características, como dijimos, de patrón de comportamiento, conlleva al ocultamiento con fines de engaño para con el Tribunal al que solicitaba la licencia y que nunca el doctor Chiara Díaz indicó que la razón que motivaba el permiso era el cumplimiento de tareas remuneradas para otro empleador.

*T13M

Pero, además de esta repetición de hechos, ya de por sí disvaliosos, se ven agravados porque el señor juez investigado solicitaba para trasladarse a las ciudades en las que desarrollaba las actividades docentes –generalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no era en la mayoría de las casas de estudio aquí en la ciudad de Paraná como hay fiscales o camaristas que desarrollan su actividad docente, por ejemplo en la UCA, pero lo hacen por la tarde, uno o dos días a la semana, a las cinco, seis o siete de la tarde–, repito, solicitaba para trasladarse a las ciudades en las que desarrollaba las actividades docentes, generalmente en Buenos Aires, la liquidación de viáticos, la adquisición por parte del Tribunal de los pasajes aéreos de ida y vuelta y el traslado en un vehículo oficial con chofer a los aeropuertos de Paraná o de Sauce Viejo, según fuera el lugar de partida o arribo del vuelo que lo trasladaba.

No se trata de que el juez firme más sentencias –dice, con razón, el denunciante Reggiardo- ni de que este juez no tenga las causas al día en su despacho, como lo destacó Chiara Díaz en su defensa. Se trata de que nadie en su sano juicio puede afirmar que no se ve afectado el servicio de justicia que la Constitución de Entre Ríos le encarga a Chiara Díaz con los altísimos niveles de ausentismo que tiene este magistrado en los últimos 10 años en los que se advierten, preponderantemente, ausencias por razones de índole privada ajena a su condición de juez como son las actividades académicas.

Podríamos decir también, señor Presidente, lo siguiente. Desde el análisis ha quedado demostrado, a esta altura de la investigación preliminar, que el magistrado sometido a enjuiciamiento ha hecho abuso de las normas en desmedro del servicio de justicia. ¿Pero por qué decimos que ha sido en desmedro del servicio de justicia?

Todos recordamos, los legisladores de la Comisión e incluso aquellos que no lo son pero que estuvieron presenciando la oportunidad en que el juez expusiera en la reunión de Comisión en el Salón de los Pasos Perdidos, que en varias ocasiones, el juez, daba cuenta no solamente de sus antecedentes, de su condición prestigiosa como docente, de los cincuenta años que estaba por cumplir al frente del Poder Judicial, sino que en muchas de sus intervenciones se autodesignó como "el primer juez", los invito que vean la versión taquigráfica, fojas 254, 274, 275, fundándose para ello en que tiene su trabajo al día y que frecuentemente trabaja en días y horarios inusuales, como sábados y domingos, redactando los borradores de las sentencias y corrigiendo lo que tiene que hacer para mantenerse al día; para luego –decía Chiara Díaz– entregarlos a la noche y dejarlos a disposición.

Sin embargo, lo que el magistrado no dijo es que ese mecanismo inusual de los sábados o los domingos –muy conveniente, por cierto, a los propios intereses académicos porque a veces venía de Buenos Aires, como vimos, de dar clases los jueves o viernes y venía los sábados–, sí conspira contra un servicio eficiente de justicia y ello surge de las normas que rigen la actividad judicial.

Veamos, señor Presidente. Los papeles de trabajo previos a la celebración del Acuerdo de sentencia, como nosotros todos sabemos un tribunal colegiado en el ámbito judicial, una Cámara o el Superior Tribunal en pleno con los nueve miembros o cada Sala del mismo, para que se materialice la sentencia la misma tiene que consignar en el Acuerdo, que es la reunión formal establecida por el Reglamento para que los jueces emitan su voto y se configure la sentencia y cobre vigencia la misma y sea notificada, en consecuencia, a las partes.

Repito, los papeles de trabajo previos a la celebración de un Acuerdo, aún cuando materialmente se encuentren en estado, sólo pueden transformarse en una verdadera decisión en una fecha determinada en la que, figurativamente, alumbra ese Acuerdo.

He aquí que esa fecha determinada de "Acuerdo", cuando estoy hablando del Acuerdo hablo del Acuerdo que tiene que hacer el Superior Tribunal, su Sala o el Acuerdo en pleno, he aquí que esa fecha determinada de "Acuerdo" sólo puede ser una en la que los miembros de la Sala o del Tribunal en pleno no estén de licencia o ausencia de la jurisdicción, por la sencilla razón que, en el mundo de la materia y también en el de la lógica formal, nadie puede estar y no estar a la vez, o se está o no se está para firmar el Acuerdo.

A modo de ejemplificar esto, si trasladamos este razonamiento a nuestro ámbito legislativo, acá al nuestro, sería el caso que cualquiera de nosotros como diputados independientemente de que hayamos trabajado y presentado muchos proyectos de ley o asistido a las reuniones de trabajo en Comisión, no concurriéramos a las sesiones, impidiendo u obstaculizando la formación del quórum para el voto de nuestros propios proyectos. Vale decir, podemos trabajar mucho como diputados, como legisladores, incluso sábados y domingos –como decía Chiara Díaz acá en el Salón de los Pasos Perdidos– pero si no tenemos una asistencia regular a las sesiones y no podemos materializar en leyes nuestro trabajo por falta de quórum, de nada le sirve a la sociedad y al propio Estado nuestra tarea legislativa, o en otras palabras el resultado de nuestras ausencias resentiría la función legislativa.

Es ahí donde no resulta veraz la afirmación de la defensa de "ser el primer juez por estar al día", porque haber dado su conformidad informal en proyectos, borradores o papeles de trabajo, aún en forma veloz para una decisión judicial, no equivale automáticamente a que ésta se transforme en un "Acuerdo" que se exteriorice de modo tal que las partes y la sociedad reciban su veredicto.

Si un vocal, aunque todo lo haya firmado un sábado a la noche o domingo conforme lo expresara acá, luego no está en su despacho el día y hora hábil, por el uso, se reitera, de licencias o por informar encontrarse ausente de la jurisdicción, dicho Acuerdo no puede materializarse y la sentencia no puede dictarse.

El Artículo 18º de la Ley Orgánica de Tribunales prevé que las Salas del Superior Tribunal –recordemos que el doctor Chiara Díaz integra la Sala Penal y Constitucional del Superior Tribunal– celebrarán Acuerdo por lo menos dos veces en la semana, mientras que el Artículo 33º dice que en los casos de los Artículos 204 y 205 de la Constitución Provincial el Superior Tribunal se integrará con la totalidad de sus miembros.

Esto significa que el Acuerdo para una sentencia no puede válidamente celebrarse, en estos supuestos, si alguno de los nueve miembros no se encuentra en su despacho. Seguramente, señor Presidente, no puedan formalizarse Acuerdos en el Superior Tribunal porque se ausentan algunos de los tres o de los nueve miembros porque un Tribunal colegiado es difícil que siempre estén todos presentes, pero mucho más difícil resulta cuando uno de esos miembros tiene un nivel de ausentismo que está debidamente comprobado en estas actuaciones.

De ahí que el exceso de licencias demostrado en la causa con el informe remitido oportunamente por el Superior Tribunal de Justicia, exceso que surge, asimismo, de confrontar la cantidad de días que el señor Vocal sometido a investigación ha solicitado respecto de sus demás colegas, refuta la afirmación sobre que sus habituales ausencias no interfieren con el trabajo que tiene a su cargo.

*14S

Continúo, señor Presidente, con lo siguiente. En el año 2010 Chiara Díaz se ausentó, con goce de sueldo, 86 días por razones académicas o por razones vinculadas a la Vocalía. Es decir, prácticamente, dos veces por semana, Chiara Díaz, durante todo el año 2010, por distintas razones no cumplió con la función que la Constitución le encomienda, muchas de las cuales porque el mismo comprometió su fuerza laboral con otros empleadores como decíamos, seis meses antes con la UBA, con la Universidad Austral, con la Universidad de Belgrano, etcétera; comprometía un cronograma de clases y después venía y semanalmente iba pidiendo las licencias.

Señor Presidente, una comparación odiosa, pero insistentemente pedida por el señor Vocal aquí en el salón de los Pasos Perdidos en sus escritos que presentó con asistencia letrada y en todas y cada una en las salidas en los medios que hizo el doctor Chiara Díaz, es la siguiente. Una comparación odiosa puede utilizarse al traer a colación los últimos informes elaborados por el Superior Tribunal e incorporado a estas actuaciones, como dije, a pedido insistentemente por el propio Vocal. Allí se advierte que en el año 2010 Chiara Díaz fue beneficiado con 99 días de licencias, Artículo 7º, días personales, compensatorios, etcétera y 62 ausencias, en tanto que la doctora Mizawak 39 y 25 respectivamente. En el año 2013, Chiara Díaz 83 días de licencia y 53 de ausencia, mientras que Mizawak 36 y 31 respectivamente.

En aras de hacer lugar a la comparación solicitada por el doctor denunciado, doctor Chiara Díaz, es necesario remarcar que según surge del cuadro comparativo que se nos ha proporcionado como prueba, siguen los siguientes resultados: año 2010 a 2016 arrojan los siguientes totales por licencias Artículo 7º, Reglamento 3, y ausencias de la jurisdicción, veamos: doctor Germán Carlomagno 219, doctor Daniel Carubia 166, doctor Emilio Castrillón 345, doctora Susana de Rizzo 558, doctora Leonor Pañeda 238, doctor Bernardo Salduna 118, doctor Juan Smaldone 174, doctor Chiara Díaz 760.

Todos los comparativos que se realicen arrojan similares resultados, señor Presidente, en los cuales el Vocal denunciado tiene la mayor cantidad de ausencias,

fojas 526/541 informe que brindó el presidente a cargo en estos últimos días del Superior Tribunal, el doctor Bernardo Salduna, por las causales invocadas.

Reiteramos, no se trata solo de reprocharle al juez de estar ausente por diversas razones en más de seiscientas sentencias de amparos, sino también de que dichas ausencias han contribuido a resentir la prestación del servicio de justicia en el tiempo que la ley establece provocando una demora innecesaria y hasta perjudicial para lo justiciable en el dictado de la sentencia. En otras palabras, señor Presidente, se trata de algo más simple que cae de maduro y resulta evidente, Chiara Díaz no ha tenido en los últimos diez años la dedicación exclusiva que la Constitución aspira para quien desempeña tan alta función judicial.

Punto seis. Consideraciones sobre el hecho imputado. Artículo 37 de la Constitución Provincial. Mucho se ha hablado, señor Presidente, a lo largo de todo este tiempo y desde que se promovió esta denuncia qué incidencia tiene y qué importancia tiene el Artículo 37 la Constitución de los entrerrianos en el caso Chiara Díaz.

En este dictamen ya hemos fijado los hechos atribuidos, pero prosiguiendo en el análisis es menester considerar la base constitucional del Artículo 37 que refiere concretamente a la ética pública. El Artículo 37 de la Constitución provincial vino a incorporar una norma trascendental para la entrerrianía al darle contenido positivo a la ética en la función pública.

Los antecedentes sobre la materia se remontan a la filosofía antigua y fue objeto de los análisis filosóficos por prácticamente todas las corrientes a lo largo de la historia universal. Sin embargo, desde aquellos germinales debates en el ámbito de los comportamientos morales, la modernidad ha incorporado al derecho positivo las exigencias de comportamientos éticos para muchos actores, pero, en lo que acá nos interesa, señor Presidente, para quienes están en la gestión del interés público.

Así se destaca la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, la Constitución Argentina del año 1994, la sanción a nivel nacional de la Ley de Ética Pública, desarrollo que fue tomado por el constituyente provincial en el año 2008 incorporado expresamente en este Artículo 37. Incluso, señor Presidente, para nosotros, legisladores entrerrianos y, fundamentalmente, en este período legislativo y en esta sesión que tratamos hace un tiempo atrás la Ley de Ética Pública, que tuvo media sanción y paso al Senado.

La primera pregunta, porque no está reglamentado el Artículo 37, no tiene ley,

dijimos que tiene media sanción aquí, es si dicha norma, es decir el Artículo 37, es en todo o en parte directamente operativa.

A partir del párrafo segundo alude a la ley reglamentaria, pero la falta de reglamentación de las disposiciones constitucionales no puede ser obstáculo para su aplicación cuando de la propia regla dimana una prohibición o un derecho, y sus consecuencias no requieren del contenido específico que una ley le otorgue.

Hemos tomado algunas de las opiniones vertidas por el Superior Tribunal extractando literalmente fallos que llevan la firma del propio Vocal del Superior Tribunal que hace consideraciones sobre si es operativa o no la norma del Artículo 37. Así lo hizo el Superior Tribunal en una causa que tanto mencionó acá Chiara Díaz, la causa Arralde, donde dijo: 30/09/2016. "Sin perjuicio de entender que las normas constitucionales reglamentarias de las instituciones aludidas no son fatales sino programáticas, lo cual desde ya que no comparto porque es tan trascendente la reforma de configuración que el constituyente de ninguna manera puede haber aceptado que el mandato de instrumentación alcanza solo al Poder Legislativo sino que contiene en subsidio otros deberes y posibilidades sin refugiarse en subterfugios para lograr más libertad. Si se aceptara la propuesta criticada sobre la base de construcciones vacías y con artilugios de palabras y conceptos, la respuesta jurídica perdería jerarquía y realismo, convirtiéndose en una cháchara increíble para todos y en un relato incomprensible para la ciudadanía responsable".

Y continúa diciendo Chiara Díaz: "La reglamentación no puede ser elevada a la condición de requisito previo para cumplir la ley mucho menos la Constitución, dado que las mismas no dependen en modo alguno de que el Poder Ejecutivo decida reglamentarlas o no: los jueces y la misma administración deben acatar y ejecutar y hacer ejecutar las leyes en los casos concretos, interpretándolas para salvar sus vacíos en la medida que fuere necesario en los casos ocurrentes, pero sin depender de que no hayan sido reglamentadas".

Así lo dice Chiara Díaz también en otro fallo del año 2014, en el caso "Giménez, Luis sobre presentación", donde dice textualmente, extracto esto: "Si bien la norma constitucional no ha sido reglamentada, ello no puede ser óbice para el tratamiento del planteo ya que eso implicaría la vulneración de otros preceptos constitucionales, como el del debido proceso..." etcétera.

*15N

Ahora bien, qué dice el texto constitucional del Artículo 37. La Constitución reza textualmente: "Los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde a la ética pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano." Para luego remitir, señor Presidente, a la ley respecto de las conductas que enumera, siendo la última de éstas una contundente prohibición.

Leo textualmente la última parte del Artículo 37 de la Constitución que es donde tenemos que centrar el esfuerzo para interpretarla: "No podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo."

Aquí se advierte, frente al desafío de interpretar dicha norma, cómo tenemos que hacer, cómo interpreta, quién necesita la aplicación de una norma, un texto constitucional. El dictamen cita, incluso, la opinión del Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Marshall, donde dice: "No debemos olvidar que lo que estamos interpretando es una Constitución". Los constitucionalistas hablan, señor Presidente, que "su naturaleza simultáneamente política y jurídica, requiere un tratamiento acorde con esa esencia dual y multifacética".

Desde sus inicios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este orden ha venido dictando fallos, y ha venido interpretando la Constitución en muchísimos e innumerables fallos, acá citamos algunos, donde el Fallo 320:61, dice: "Las palabras deben entenderse –dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación– empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria"; y dice también la Corte Suprema: "Cuando los términos de la ley son claros, no corresponde... apartarse de sus propósitos so pretexto de evitar deficiencias reales o presuntas que podrían resultar de su aplicación".

Por ello, es contundente de la prueba informativa obrante que existió un patrón de incumplimiento a la asistencia normal de las tareas propias del cargo.

Ahora bien. aún si se probare eventualmente en el juicio, por la defensa, que ello no obstaculizó el ejercicio de dichas funciones desde el punto de vista finalista, es decir de la emisión de la sentencia, lo cierto, señor Presidente, es que la norma contiene un parámetro objetivo que describe en la conjugación verbal "asistencia regular a las tareas propias del cargo". No refiere, por lo tanto, al cumplimiento regular de su función

primordial que es dictar sentencias sino, por el contrario, a la asistencia a las tareas propias del cargo, que incluyen, en el caso de los Vocales por supuesto otras que tienen que ver con el propio gobierno del Poder Judicial de la Provincia.

En el caso de los jueces, sin distinción de fueros o instancias, la propia Ley Orgánica de Tribunales da contenido a esta disposición en cuanto en su Artículo 19, en el primer párrafo, dentro del Capítulo III, que habla de las "Obligaciones y Derechos", dice lo siguiente, señor Presidente, y habla del deber de asistencia especificando que: "Los vocales, jueces, funcionarios y empleados, deberán concurrir diariamente a su despacho u oficina durante las horas que determine el Superior Tribunal de Justicia", agregando en la parte final del segundo párrafo: "La reiteración de la infracción a la presente obligación, será considerada falta grave a los efectos del enjuiciamiento". Adviertan que el Reglamento orgánico del Poder Judicial considera falta grave, sujeto de enjuiciamiento, trasladado a los vocales del Superior Tribunal que no están sujetos a enjuiciamiento por jury, sino a juicio político como hoy aquí estamos tratando, incluso sería entendido como causal de juicio político.

Volviendo a la referencia de la interpretación constitucional en los precedentes del máximo Tribunal, es claro, señor Presidente, que desde jardín de infantes en adelante, los niños, los adolescentes y los adultos, los alumnos y los trabajadores, cualquier ciudadano en su vida diaria, comprende cuál es el verdadero significado de la palabra "asistencia", en el caso, "estar físicamente en su despacho en el horario que la ley así lo dispone".

Pero si aún se dijera que el lenguaje cotidiano no es suficiente, ¿adónde tenemos que acudir?, a la definición de "asistencia" que brinda la Real Academia Española, cuya primera acepción del término dice que es la "acción de estar o hallarse presente".

Señor Presidente, nos preguntamos: ¿Ha estado presente el señor magistrado en su despacho con la regularidad que exige el Artículo 37º y complementa el Artículo 19º de la Ley Orgánica de Tribunales? La respuesta es no, como vimos de todo el análisis que hemos hecho de la prueba.

Queda que en cada oportunidad en que estuvo ausente el denunciado afirme que existió una justificación dentro del marco normativo, asuntos de su Vocalía, estudios, lo que fuere, no significa que en el análisis global de la conducta en términos relativos, esto es, en un período de tiempo suficientemente extenso y de un modo lo suficientemente repetitivo, pueda concluirse en que la "falta de regularidad" constituye, aún bajo la

pantalla de una supuesta habilitación normativa reglamentaria, lo que el texto constitucional está llamado a impedir.

Significa, en síntesis, que, aún dentro de la norma, lo que sitúa el comportamiento del magistrado en la conducta prohibida, es el abuso que precisamente trata de impedir el texto del Artículo 37 de la Constitución Provincial, de lo contrario si sus "inasistencias" no estuvieran justificadas de modo alguno, no sería necesaria la expresión contenida en el Artículo 37 porque en tal caso simplemente se trataría del liso y llano incumplimiento de una ley positiva reglamentaria que no requeriría una cláusula específica destinada a proteger al ciudadano de comportamientos faltos de ética por parte de los funcionarios públicos.

Es entonces, el exceso, señor Presidente, el abuso, el desvío, en la utilización de las normas reglamentarias, acreditado con la documental que se agregó, el que tipifica el comportamiento prohibido por la norma del Artículo 37 en su última parte.

Acerca de ese artículo hubo un miembro informante en el seno de la Convención Constituyente, hoy sentada a mi lado, la doctora Rosario Romero, quien fundamentando los alcances de dicho artículo expresaba lo siguiente, y voy a leer textualmente lo que dijo en aquella oportunidad la doctora Rosario Romero, convencional constituyente, cuando habla del Artículo 37.

"El último punto motivó –dice la convencional– algún debate en el seno de la comisión para trabajar un texto que no llevara a confusión, ojalá así lo hayamos logrado, y que establece que los funcionarios públicos y los magistrados judiciales no podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, en modo que afecte u obstaculice la concurrencia al despacho en los días y horarios habituales de atención al público o la asistencia regular a las tareas propias del cargo". Esto lo dijo el 22 de agosto de 2008.

Al finalizar agregaba la convencional lo siguiente: "Consideramos fundamental para que nuestros jueces y nuestros legisladores, al momento que tengan que impartir justicia o legislar, estén en sus despachos, atiendan las audiencias y estén garantizando la función altísima y principal para la que están designados. Y que la docencia, en todo caso, u otra actividad de corte profesional liberal o de otra actividad particular, sea accesoria, nunca principal, nunca la que les ocupe la mayor parte de su tiempo".

*16G

Otro miembro, señor Presidente, de aquella Convención reformadora del año 2008, que tenemos el gusto y el honor de tenerlo aquí sentado como colega diputado, el doctor Monge, cuando hablaba del ejercicio de la ética en la función pública, citaba nada más y nada menos que al expresidente de los argentinos, doctor Raúl Alfonsín, quien, en un discurso pronunciado el 1º de diciembre de 1985 en Parque Norte, decía: "La democracia que concebimos sólo puede constituirse a partir de una ética de la solidaridad, capaz de vertebrar procesos de cooperación que concurren al bien común. Esta ética se basa en una idea de justicia como equidad, como distribución de ventajas y de los sacrificios, con arreglo al criterio de dar prioridad a los desfavorecidos aumentando relativamente su cuota de ventajas y procurando disminuir su cuota de sacrificios".

Esta Comisión se pregunta, señor Presidente, en este marco, si asistir regularmente a dictar clases a universidades públicas y privadas percibiendo además una remuneración por su actividad docente, y en ocasiones también viáticos, cuando simultáneamente percibe un salario en compensación por su trabajo que incluye una serie de obligaciones tales como estar en su despacho en días y horas hábiles, excluyen al señor magistrado investigado de la idea de justicia como equidad, exigiéndole a sus propios colegas, a todos los empleados del Poder Judicial, y al resto de los funcionarios y empleados del Estado provincial, los sacrificios a los que aludía el doctor Alfonsín, mientras él sólo, aparentemente a costa del sueldo que el Estado le pagó regularmente, aumentaba la cuota de ventajas propias.

Cabal prueba de que el denunciado no considera el cumplimiento de la ley, son sus propias declaraciones a la prensa, señor Presidente. En la prensa el doctor Chiara Díaz decía hace unos días lo siguiente: "Algunos diputados no entienden nada. El denunciante habla en un lenguaje y me atribuye cosas que denotan una falta de conocimiento. Uno no puede estar en el despacho, sin una causa, y quedarme en el despacho por las dudas si viene alguien a verme. Los vocales, los camaristas, aún los jueces, no se quedan en el despacho porque tienen una estructura para atender a la gente. Yo podría, desde mi casa, enviar directamente las sentencias, y luego paso y firmo. Y haciendo esto, no se puede decir que paso y firmo". Lo decía textualmente en un medio periodístico.

Señor Presidente: El mero uso abusivo de la normativa reglamentaria sobre licencias y ausencias, en el marco de la obligación del Artículo 19º de la Ley Orgánica de Tribunales, en conjunción con la prohibición del Artículo 37 de la Constitución Provincial,

bastan para considerar al magistrado incurso en el mal desempeño que exige el Artículo 140 de la Constitución, a lo que se agrega que se alegaron en la inmensa mayoría de los casos, como razón para solicitar autorizaciones para ausentarse y licencias, motivos atinentes a la Vocalía, que no existieron, como se vio en el análisis de la prueba.

Punto siete. El juicio político y el mal desempeño. La Comisión en este aspecto, y referido al juicio político entendido como tal y a la causal de mal desempeño, ha hecho algunas citas doctrinarias y jurisprudenciales, como citar que es un "procedimiento especial tendiente a evaluar la responsabilidad política de determinados funcionarios y magistrados para juzgar acerca de la conveniencia de su continuidad en el desempeño de un determinado puesto de gobierno, en base a cargos que se formulan a los acusados en relación a su actuación y al mantenimiento de las condiciones de idoneidad requeridas para ejercerlo adecuadamente"; hablando de lo que es el proceso del juicio político.

Rosatti, por ejemplo, dice que apunta a "evaluar la responsabilidad de un funcionario por medio de un proceso –en el que se garantiza el derecho de defensa del acusado– que es dirimido por un jurado... –será el Senado–, y es 'político' por cuanto lo que se evalúa (...) es el desempeño del funcionario, a fin de determinar la continuidad o cese de su mandato".

Señor Presidente: El procedimiento del juicio político, tal como hoy está regulado en nuestra Constitución, en la Constitución del año 2008, que en definitiva tomó la sabia Constitución, como dijimos, del año 33, prácticamente no registra antecedentes. Hoy nos preguntaban en la prensa, y es cierto, encontramos un antecedente en lo personal allá en la Constitución de 1883: en el año 1896 fue exonerado el Vicegobernador, doctor Francisco Gigena, Vicegobernador por aquel entonces del Gobernador Salvador Maciá. Y en 1903, en adelante con la Constitución de 1903, hubo un caso de destitución a un juez de la costa del Uruguay, Urquiza Montero, que lo destituyó el Senado; no era un juez vocal del Superior Tribunal pero en aquel entonces no existía el jury de enjuiciamiento y en consecuencia se lo destituyó por el procedimiento del juicio político.

El procedimiento del juicio político, decía, tal cual hoy está regulado trata el juicio política en forma muy completa, y mejorada por la Constitución de 1903. Justo Medina, un convencional constituyente del año 33, que escribió el libro comentado de la Constitución, es el que mejor nos ilustra. Dice Justo Medina en una parte: "Llamados a iniciar y terminar el procedimiento político, deben actuar en la delicada misión que se les comete con estricta justicia y noción exacta de la responsabilidad tutelar que ejerce, y a

la vez con completa libertad para juzgar a cualquier funcionario de la República. Todos deben sentir honestamente, como el doctor José Pedro Ramírez que decía: 'si yo creyere que en mi país no fuese posible llevar a cabo el juicio político preceptuado por la constitución, no sería representante del pueblo'...", y luego agrega: "Sabido es que se necesita mucho valor moral para asumir el papel de acusador de altos funcionarios y jueces y que más de una voluntad debe detenerse frente a las extralimitaciones de los mandatarios, temerosa de la reacción que ha de sobrevenir en el caso de gestiones fracasadas".

– Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Primero del Cuerpo, diputado Juan Navarro.

SR. LARA – Quiero omitir algunos párrafos, pero volver a algo que me parece importante desarrollando el alcance del juicio político.

"El propósito del juicio político –decía Joaquín V. González– no es el castigo de la persona, no estamos castigando acá a la persona, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro por el abuso por el poder oficial, descuido del poder o conducta incompatible con la dignidad del cargo".

Quiero pasar a algunos párrafos y centrarme en que la causal de mal desempeño, como lo dice el constitucionalista Alfonso Santiago: "Mina la base misma de la autoridad y potestad de los jueces que es la honradez y credibilidad que inspiren a los otros órganos de gobierno y a la sociedad entera". Nótese además, señor Presidente, que la función judicial, y más en la más alta esfera de la Provincia como es la del Superior Tribunal, exige que el ejercicio de la tarea sea realizado con singular ejemplaridad de vida, que trasciende el desempeño estrictamente funcional del cargo, con el sólo límite del artículo 19 de la Constitución Nacional respecto de las acciones privadas, aunque con menor apego, ya que el carácter de la función pública y funcionario público restringe el ámbito de privacidad de un juez respecto de un ciudadano común. En esa línea, así lo consideró el pleno de esta Cámara cuando tratamos el juicio político anterior.

Y termino este párrafo, señor Presidente, con algo que creo que no nos debe resultar llamativo, sino que nos debe impulsar, al menos, a una reflexión.

*T17Cep

En el año 1996 en Jurisprudencia Argentina, que es donde se editan fallos de la jurisprudencia y también se publican opiniones doctrinarias de académicos, docentes,

etcétera, encontramos una publicación del doctor Chiara Díaz, que en el Tomo III, página 660, habla nada más ni nada menos sobre "El Perfil del Juez", y en una parte Chiara Díaz dice lo siguiente, textualmente: "La sociedad necesita jueces de tiempo completo, que se dediquen con amor y sin especulaciones a sus tareas judiciales, como objetivo principal de sus vidas. No hay espacio para quienes van a calentar una silla, están pendientes de que se cumpla el horario a fin de liberarse y asumir otros menesteres o que agudizan el ingenio para gozar de todas las licencias...".

Punto ocho. Conclusiones y reflexiones finales. Que a modo de corolario y síntesis de lo hasta aquí expuesto, cabe destacar que de los documentos incorporados y los descargos formulados por el señor juez del Superior Tribunal de Justicia, doctor Chiara Díaz, podemos afirmar lo siguiente: a) Esta Comisión ha encontrado en la conducta del magistrado un patrón común que se repite sistemáticamente a lo largo de los últimos 10 años en el que el juez, al momento de solicitar al Superior Tribunal de Justicia autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción, licencias, viáticos y pasajes, omitió deliberadamente informarle al Superior Tribunal los verdaderos motivos de sus ausencias, invocando "cuestiones vinculadas a la Vocalía", o razones que eran encuadradas dentro del Artículo 7º del Reglamento 3, siendo que en la realidad tales ausencias lo eran solo en función de dictar clases u otras actividades que hacía en forma remunerada sin informar tampoco tal circunstancia a sus superiores o bien otras actividades estrictamente particulares.

b) Asimismo, se han detectado en innumerables oportunidades que el magistrado percibió, por el mismo día y por idéntico traslado, contribuciones económicas en concepto de viáticos que fueron abonados por el Poder Judicial de Entre Ríos en simultáneo con distintas casas de altos estudios.

c) También se ha revelado que el juez, doctor Chiara Díaz, tiene niveles de ausentismo en extremos que no se condicen con las altas responsabilidades que la Constitución de Entre Ríos pone en cabeza de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y que esta situación conlleva inexorablemente a un retardo en la prestación del servicio de justicia por la imposibilidad de lograr los "Acuerdos" necesarios para el dictado de las sentencias.

d) Que es evidente que el juez ha utilizado los recursos del Poder Judicial en exclusivo beneficio propio que, con apariencia de privilegios personales, le permitieron

desarrollar actividades académicas a niveles profesionales en directo detrimento de su función principal como magistrado de Entre Ríos.

e) La desaprensión constante que la actitud del Juez Chiara Díaz demuestra respecto de las funciones que la Constitución Provincial le encomienda a los miembros del Superior Tribunal, denota umbrales de dedicación mínimos inaceptables para continuar ejerciendo el poder jurisdiccional que tienen los magistrados.

f) Los compromisos académicos que, a lo largo de estos últimos diez años, asumió el juez con distintas casas de altos estudios, en su gran mayoría fuera de la jurisdicción y con una importante carga horaria, evidencian una quita de tiempo significativa en sus funciones en la magistratura, no referidas estricta y solamente al dictado de sentencias, sino aquellas propias del gobierno del Poder Judicial.

g) El hecho de haberse autoasignado viáticos estando en objetivas imposibilidades materiales de ausentarse de la jurisdicción por encontrarse designado como autoridad de feria y en ejercicio de la Presidencia del Superior Tribunal, por sí mismo, constituye una causal de remoción que encuentra su antecedente más cercano en la destitución del miembro del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, José Rubén Morel, toda vez que, conforme relatan las actuaciones que obran en autos, el juez Chiara Díaz no sólo obró mal en esa oportunidad sino que luego, al ser descubierto, se exculpó con un argumento al mismo tiempo que consintió la ilicitud de su obrar devolviendo los fondos que él mismo se había concedido.

h) El modo en el que el doctor Chiara Díaz se ha venido desarrollando a partir de la reforma constitucional devenida en Entre Ríos en el año 2008, también evidencia la incompatibilidad de su conducta para con los nuevos parámetros constitucionales, en particular como se dijo aquí, con la norma contenida en Artículo 37 de la Constitución de Entre Ríos.

i) Las conductas del juez descriptas a lo largo del desarrollo del presente dictamen revisten la suficiente entidad para configurar la causal de "mal desempeño" toda vez que en el caso en análisis, surge con evidencia, que el doctor Chiara Díaz se apartó de la responsabilidad que significa el ejercicio de la magistratura.

j) Que de las defensas esgrimidas verbalmente por el juez y de modo escrito por su representante legal, podría desprenderse la intención de morigerar la gravedad de las imputaciones, mediante su encuadre en la órbita administrativa para lo cual esta Comisión tiene fundamentos suficientes para rechazarlas toda vez que el buen

comportamiento exigido a un juez se extiende a todas las conductas que desempeña, ya sean jurisdiccionales o administrativas, conforme precedente de la remoción del juez Solá Torino.

-Ocupa la Presidencia el titular del Cuerpo, señor diputado Urribarri.

SR. LARA – En efecto, son los hechos, esto es, la conducta atribuida a un juez, la que configura las causales establecidas en la Ley Suprema y no la calificación o encuadre que se les asigne.

Señor Presidente: a esta altura de las consideraciones que se han venido formulando, parece conveniente darle centralidad a la cuestión de la significación política institucional del presente proceso constitucional. Ello para ubicar e insertar las conclusiones a las que hemos arribado como emergentes naturales de los legítimos poderes y funciones que por voluntad del Pueblo de la Provincia ejercemos en esta instancia.

En tal sentido se impone en forma prioritaria destacar como principio que instila en todas las instituciones creadas por nuestra Constitución, la circunstancia de que la primera y quizá la más significativa característica de la República es la responsabilidad de todos los magistrados y funcionarios que ejercen funciones públicas. En efecto, ello distingue aquel sistema de gobierno que floreció en la Roma antigua y renació en Venecia y en las Repúblicas Italianas del Renacimiento, de las monarquías absolutas o constitucionales, muchos más comunes en la historia, en las que el rey y la nobleza estaban eximidos, en principio, de responder por su conducta.

Es así, señor Presidente, que en la Argentina y naturalmente en todas las Provincias que la integran, la responsabilidad de los funcionarios es una especie de *prius* institucional, que recibió consagración suprema en el Artículo 16 de la Constitución Nacional que establece "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley...". Y más allá de que ha habido y hay quienes, confundiendo la estabilidad de los magistrados, su independencia del resto de los poderes del Estado y la irreductibilidad de sus remuneraciones, con una suerte de "nobleza de toga" que los resguarda de cualquier responsabilidad que por cualquier motivo se les pudiera endilgar, lo indiscutible es que, incluso con mayor intensidad que cualquier ciudadano, cada vez

que correspondiere, su conducta deberá ser escrutada con responsable pero ineludible firmeza por quienes son titulares de la potestad de examinar de qué forma ellos ejercen sus funciones.

Es por ello que las presentes actuaciones de las que este dictamen resulta conclusivo, se han debido desarrollar y de hecho se han desarrollado con máximo apego por la vigencia de la Constitución y los derechos del ciudadano denunciado. Pero también con absoluta firmeza para sostener la convicción que por fin hemos formado en el procedimiento; y para destacar el superlativo celo que hemos empeñado en la transparencia de todos los actos realizados.

*T18M

Se ha tratado entonces de concretar este principio constitucional de la igualdad sometiendo a las formas constitucionales del procedimiento a un ciudadano que ha sido honrado por los poderes del Estado intervinientes en su nombramiento, con la calidad de Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Así entonces, en el caso hemos procedido con máxima responsabilidad para ejercer nuestras funciones y ponderar la conducta del denunciado respetando cabalmente sus derechos.

Y también hemos empeñado máxima voluntad de cumplir tal función sin dudar un instante, dada la jerarquía funcional del magistrado, asumiendo que el funcionamiento regular de las instituciones del Estado provincial demanda en el caso un procedimiento justo y serio, habida cuenta que el Poder Judicial de la provincia y el prestigio que lo debe acompañar para hacer respetables sus sentencias, solo puede armonizar con la verdad a cuya búsqueda hemos dedicado nuestro oficio.

El nudo de la cuestión a considerar pasa por la idea de asumir que incumbiéndole al más alto Cuerpo Judicial de la Provincia, ejercer jurisdicción originaria y exclusiva en las gestiones acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan en materias regidas por la Constitución de la provincia de Entre Ríos, es exigible a cada uno de sus miembros un respeto absoluto y sincero de sus disposiciones, de su letra y de su espíritu.

En las presentes actuaciones no cabe duda que el denunciado se ha apartado reiterada y casi sistemáticamente de la norma de la Constitución contenida en su Artículo 37 que prohíbe el ejercicio de la docencia cuando ello afecte la asistencia regular a las tareas propias del cargo, como así también de otras leyes y reglamentos que regulan su actividad jurisdiccional, comportándose como si él estuviera fuera del universo de los

ciudadanos obligados a cumplirlas.

Que, en consecuencia y teniendo por concluidas las instancias exigidas en este proceso, y analizadas rigurosamente las constancias incorporadas a la presente causa, se alcanza el grado de convicción necesario para formular acusación contra el doctor Chiara Díaz por la causal de mal desempeño del cargo en los términos del Artículo 140 de la Constitución Provincial.

Convicción que justifica ampliamente la aceptación y acusación prevista en el Artículo 144 de la Carta Magna con la correspondiente suspensión del magistrado en los términos del Artículo 145 de esta Constitución.

Por ello, señor Presidente, esta Comisión resuelve:

Artículo 1º- Promover el procedimiento de juicio político al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por haber incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones conforme los Artículos 138 y siguientes de la Constitución de Entre Ríos, en virtud de los hechos expuestos en el presente.

Artículo 2º- Suspender al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, en los términos y con los alcances del Artículo 145 de la Constitución Provincial.

Artículo 3º- Acusar al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, Juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos conforme los Artículos 144 y 146 de la Constitución de Entre Ríos sobre la base de las consideraciones efectuadas precedentemente.

Artículo 4º- Notificar al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, Juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a los efectos previstos por el Artículo 145 de la Constitución Provincial.

Sala de Comisiones, Paraná, 13 de diciembre de 2016. **(Aplausos)**

SR. MONGE – Pido la palabra.

Lejos de Fayt, señor Presidente, lejos del jurista ejemplar que partió a la patria de los muertos hace días nada más, y que desde su sitial en el tribunal cimero de la Nación Argentina prestigió la República, prestigió la República sosteniendo los valores, haciendo prácticamente un apostolado de la imparcialidad, la decencia y la independencia en su labor judicial.

Cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, cursé Derecho Constitucional con un viejo frondizista, ya viejo en aquel entonces y hoy desaparecido, el doctor Decio Carlos Francisco Ulla. Él fue

uno de los redactores de la Constitución santafesina de 1962 que todavía continúa vigente, después fue Fiscal de Estado de Silvestre Begnis en su segunda gobernación y después miembro de la Corte de Justicia de Santa Fe.

Me gustaba la materia y cuando hablaba de Montesquieu y de la división de los poderes que en definitiva luego ha avanzado, más que división de poderes se habla de separación de poderes, o de órganos, o de funciones, pero bueno, así era en aquel momento y nos decía: un poder ejerce preponderantemente una función pero no única ni exclusivamente, no única porque excepcionalmente un poder ejerce funciones de los otros poderes, y no exclusiva porque las funciones que ejerce preponderantemente, de vez en cuando, excepcionalmente, las ejercen los otros dos poderes. Y así, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ejerce preponderantemente funciones de administración pero no son únicas porque ejerce funciones legislativas con un decreto, con una resolución y funciones jurisdiccionales con una multa, con la culminación de un sumario administrativo.

Y siempre soñaba con ser legislador, señor Presidente, desde chiquito porque estoy en política desde los 13 casi 14 años. Pero nunca me iba a imaginar que cumpliendo la función que es normal, preponderantemente la función legislativa, nunca me iba a imaginar que nos encontráramos de lleno –porque hubo amagues hace un mes o dos–, que hoy nos encontráramos de lleno en una función excepcional del Poder Legislativo como es realizar una función con un tinte jurisdiccional.

Y seguramente como nos estamos aprestando a ejercer estas funciones, de algún modo vamos a abrir la puerta de aquel arsenal que mencioné en la otra oportunidad donde decía que el juicio político es una institución que tiene más vida en la literatura jurídica que en la vida concreta, y citaba a quien fue Ministro de Yrigoyen, a José Nicolás Matienzo, que en un análisis, entre otras cosas, decía que el juicio político es como una gran pieza de artillería que nunca se usa porque es muy difícil sacarla del galpón. Bueno, nosotros la vamos a sacar en esta oportunidad, veremos después cuál es la utilización de esta gran arma de artillería en la Cámara Alta de la provincia de Entre Ríos.

*19S

Y llegamos a esta sesión, señor Presidente, luego de atravesar un camino –hablo en nombre de este bloque– que ha sido difícil. Se nos presentaron en el medio algunos interrogantes, fundamentalmente acerca de cuál es el *substratum* teleológico, la finalidad de la medida que estamos a punto de sancionar, fundamentalmente porque el 30 de

agosto, como aquí se ha dicho, se rechazó *in limine* una presentación que, aunque distinta y grosera en su formas, de alguna manera tenía la misma intención, buscaba los mismos fines que ésta que, pasado dos meses y algo, se le da curso.

¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ahora sí, señor Presidente? ¿Se pretende mejorar el servicio de justicia en Entre Ríos con esta medida? Si fuera así estamos de acuerdo y vamos a acompañar en estas actitudes.

Los otros días leía el discurso de Albert Camus cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, casualmente fue un 10 de diciembre, un día que después sería el día Universal de los Derechos Humanos para este intelectual que creo que conjuga muy bien el auténtico progresismo con la moral y la ética.

Albert Camus, les dijo a la academia sueca: vengo aquí rico en dudas. Y nosotros, como decía, estamos rico en dudas en cuanto al *substratum* teleológico de la promoción de esta acción; que si se marca para mejorar la institucionalidad de nuestra Provincia, si esto representa un conato, una especie de brote de frescura y de republicanismo en Entre Ríos, bienvenido sea, señor Presidente. Porque si nos atenemos a los dichos del Vocal cuando asistió el 1º de diciembre a esta Cámara a ejercer su defensa *in voce* qué debemos concluir. Dijo que las normas constitucionales operan aquí de manera más deficiente que en Formosa y Santa Cruz. Nos comparó con Formosa y Santa Cruz. Y esto no solamente lo dice Chiara Díaz, lamentablemente, muchos periodistas, muchos pensadores independientes y que nos hacen a esta Entre Ríos lejos de Fayt, como decía, aquel juez que no iba a los actos públicos para no mezclarse con los funcionarios y preservar su recato, además de su austeridad.

Estamos lejos de esa Entre Ríos de Fayt y de la Entre Ríos fundadora del Estado nacional en 1853-1860, pero esa lejanía no se debe exclusivamente a la conducta que estamos enrostrando al Vocal que va a ser enjuiciado en el Senado. Voy a soslayar alguna intervención que teníamos preparada, ya ha dicho prácticamente todo con la lectura del dictamen el señor Presidente de la Comisión.

En definitiva, y como bien dijo, este es un instituto que no ha tenido prácticamente aplicación para los funcionarios, no ha tenido desde la vida institucional entrerriana, no solo desde 1933, para todos los funcionarios que hoy son pasibles de juicio político según el Artículo 138: gobernador, vice, los ministros del Poder Ejecutivo y los miembros del Superior Tribunal y el Defensor del Pueblo que, obviamente, es una institución nueva a partir del año 2008 creada.

Esta institución, como la conocemos, se da con una Cámara que acusa y la otra que juzga. Obviamente, para funcione, tienen que existir dos Cámaras y en Entre Ríos existieron dos Cámaras recién a partir de la Constitución de Racedo en 1883 y sometía a juicio político, porque no existía el jury, el jurado de enjuiciamiento se incorpora para muchos funcionarios, pero en el Poder Judicial de los camaristas para abajo, los jueces inferiores, se incorpora recién con la Constitución del '33. De manera tal, que los jueces de primera instancia estaban sometidos a juicio político hasta 1933, valga la redundancia.

Pero de los sujetos que hoy son pasibles, o que desde el año 33 son pasibles y que acabé de consignar, el único caso de destitución fue efectivamente el vicegobernador de Salvador Maciá Carbó, así era su apellido compuesto materno, que a poco de asumir hubo problemas políticos entre Salvador Maciá, los hermanos Carbó y Leonidas Echagüe, por un lado enfrentados básicamente a Sabá Hernández, y este Gigena era próximo a Sabá Hernández y por haber denunciado despotismo y demás, en aquel momento sacaron el arma de artillería y tronó el escarmiento para el doctor Francisco Gigena, después no hubo ningún otro caso.

No redacté el dictamen y no recordaba la cita que han tenido a bien los colegas de mencionar con exceso en sus elogios, pensé que iban a mirar por el lado de la intervención en el juicio político cuando se discutió. En el año 2008 se mantuvo la estructura que viene del 33, se le incluyó el Defensor del Pueblo, se agregaron las causales que antes no existían, se prohibió la recusación y se estableció alguna referencia en cuanto al voto en el Senado, al votar el senador está haciendo suyo los fundamentos si es que no lo hace de manera distinta.

Pero en cuanto a las causales se discutió mucho y se terminó aprobando la teoría, la idea o el proyecto que nosotros sosteníamos, la Unión Cívica Radical acompañados por la Coalición Cívica, y que no era hacer la inclusión de los delitos como causal; únicamente el mal desempeño y la incapacidad física y mental sobreviniente que evidencie falta de idoneidad,

Felizmente se dejaron de lado los delitos porque ahí, a nuestro criterio, era innecesario que se nos explique. Para que haya un delito tiene que haber sentencia firme que así lo declare por un juez. ¿Cómo puede ser enjuiciado un gobernador, un vice, ministro o algún miembro del Superior Tribunal, si no se lo destituye? Era imposible, era de imposible cumplimiento, porque primero hay que destituirlo o autorizar el juzgamiento.

*20N

Entonces, se desechó eso y todo queda en la omnicomprendiva causal del mal desempeño que puede, incluso, comprender hasta la sospecha de la comisión de un delito por parte de los sujetos pasibles del juicio político. Y también entendemos, sin perjuicio de la colección de pruebas que aquí se han referenciado en detalle y con exceso, señor Presidente, pero estamos ante un proceso de naturaleza política donde el poder de acusar y el poder de sentenciar en este juicio es discrecional de cada una de las Cámaras respetando, obviamente, la forma del debido proceso.

Después, lo que es mal desempeño, es una facultad absolutamente discrecional de interpretar por parte de esta Cámara de Diputados cuando acusa y por parte de la de Senadores cuando juzga. Es decir que hay una discrecionalidad para juzgar si los hechos tienen una entidad y la gravedad necesaria que de algún modo autoricen una medida segregativa para el funcionario encartado.

Así que por todas estas razones y con todos los señalamientos que hemos hecho respecto del *substratum* teleológico de lo que hoy estamos cometiendo, vamos a votar favorable el dictamen que se ha leído.

SR. TRONCOSO – Pido la palabra.

Creo, señor Presidente, que el informe de la comisión es más que claro y contundente, y las pruebas reunidas son motivo para considerarlas como causales de mal desempeño en las funciones.

Como decía el diputado Monge, tienen que soplar buenos vientos en la Justicia de aquí en más, más allá de la situación que se vive en el país con el tema de la Justicia, y a veces en Entre Ríos; por eso creo que debemos dar un paso fundamental en tratar de que esto sea de aquí en más un camino que lo transitemos juntos para buscar lo que se necesita de la Justicia porque realmente a veces no llegan las cosas como deben ser.

Digo algunas cosas fundamentales, conozco al doctor Chiara Díaz desde hace muchos años, he pasado ya por el tratamiento de un pedido de juicio político, usted sabe señor Presidente, que tuve que defender un caso fundamental en momentos muy difíciles en Entre Ríos, y lo hice porque en aquel momento vi que no había causales para avanzar en el pedido de juicio político y lo defendí, pero hoy ha llegado el tiempo en que debemos tomar las cosas con seriedad y responsabilidad de una vez por todas; primero, porque el doctor Chiara Díaz en muchas oportunidades ha atacado al Poder Legislativo, y lo acaba de hacer hace un rato en un medio donde ha dicho que los delincuentes van a juzgar a

los jueces.

La verdad, señor Presidente, que en este recinto no encuentro a ningún delincuente, quien se tiene que hacer cargo de eso es Chiara Díaz, y creo que lo que tenemos que hacer es cruzarnos enfrente y denunciarlo por estas declaraciones que lo único que hacen es ensuciar a este Poder Legislativo. De una vez por todas debemos terminar con aquellos que quieren plantear cosas, o defender cosas, que son indefendibles. Lo de Chiara Díaz es indefendible.

Por eso, señor Presidente, también le pido a los legisladores que midamos todos con la misma vara, porque sin dudas van a venir otros pedidos de juicio político y hay que abrir las investigaciones, y por ahí no compartí cuando en el anterior pedido de juicio político al doctor Chiara Díaz no se abrió una investigación. Sé que el Bloque Cambiemos lo había pedido y no se pudo lograr, pero tampoco las pruebas eran tan contundentes como las que tenemos hoy, como para poder avanzar en este juicio político.

Por estas razones, señor Presidente, voy a acompañar el dictamen de comisión que propone la aceptación del pedido de juicio político.

SR. BAHLER – Pido la palabra.

Señor Presidente, después de haber estudiado las pruebas presentadas a esta Cámara por parte del vocal del Superior Tribunal, doctor Chiara Díaz, respecto a las acusaciones efectuadas en su contra por el doctor Reggiardo de la ciudad de Victoria, es de mi más íntima convicción de que están dadas las condiciones para que actuemos en consecuencia con el papel que nos otorga la Constitución de la Provincia, y por ello aprobar el dictamen de la Comisión de Juicio Político y trasladar al Senado provincial para que se constituya como corte de justicia.

Señor Presidente, en el día de ayer ha ingresado a esta Cámara el pedido de juicio político para la Presidenta del alto Tribunal, debemos como cuerpo prestar mucha atención a los acontecimientos que se están produciendo, y a su desarrollo. La Justicia entrerriana se encuentra en una profunda crisis que no escapa a nuestro conocimiento, y debemos actuar en consecuencia con el mayor de los celos. Esta es la tarea que nos ha impuesto el pueblo de nuestra Provincia y no debemos fallarle, ya que sino seremos responsables de acrecentar el deterioro que ya existe en la relación con nuestros comprovincianos.

Por lo expuesto anteriormente, señor Presidente, acompaño el dictamen de la comisión.

SR. BAHILLO – Pido la palabra.

Quiero hacer una pequeña corrección antes de pasar a votar este dictamen de comisión. Cuando inició su fundamentación el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento, diputado Lara, se refirió al dictamen y dijo al inicio “a los 12 días del mes de diciembre del año 2016”, por eso quiero hacer una pequeña corrección, producto que la comisión estuvo convocada para el día de ayer para tener su reunión, y por acuerdo de los distintos bloques parlamentarios se pospuso para el día de hoy, y el dictamen, para que quede fehacientemente claro en la versión taquigráfica, fue emitido y firmado en el día de hoy, martes 13 de diciembre.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el dictamen de comisión.

Esta Presidencia hace la aclaración de que se requieren los dos tercios del total de los miembros de la Cámara para su aprobación, o sea 23 votos, según lo establece el Artículo 144 de la Constitución Provincial. También, según lo establecido por la Constitución, se debe votar el único dictamen que se ha emitido.

Quienes se manifiesten por la afirmativa, levantando la mano, estarían a favor de la acusación, y de la aprobación del dictamen.

– La votación resulta afirmativa por unanimidad.

Cuarto intermedio

SR. BAHILLO – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que pasemos a un breve cuarto intermedio con los diputados en su bancas para dar cumplimiento, antes de la finalización de la sesión, con lo que establece el Artículo 146 de la Constitución Provincial que indica que se debe conformar una comisión de cinco diputados para continuar con el siguiente paso del juicio político.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Bahillo.

– La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Pasamos a un breve cuarto intermedio, con permanencia de los señores diputados en sus bancas.

– Son las 14 y 27

*21G

Reanudación de la sesión

-A las 14.35, dice el:

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Continúa la sesión.

Por Prosecretaría se dará lectura al Artículo 146 de la Constitución de la Provincia.

SR. PROSECRETARIO (Cornejo) – *(Lee)* "Artículo 146 - Admitida la acusación por la Cámara de Diputados, nombrará ésta una comisión de cinco de sus miembros para que la sostenga ante la Cámara de Senadores, juez de la causa, a la cual le será comunicado dicho nombramiento y la aceptación de la acusación".

SR. RUBERTO - Pido la palabra.

Señor Presidente: en nombre del Boque Justicialista propongo para integrar la comisión de acusación a los diputados: Juan José Bahillo y Diego Lara.

SR. KNEETEMAN – Pido la palabra.

Señor Presidente: desde el Bloque Cambiemos proponemos a la diputada María Alejandra Viola y al diputado Jorge Monge.

SR. BHALER – Pido la palabra.

Señor Presidente: propongo al diputado Troncoso, del Bloque Recuperación Radical, para integrar la comisión.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se ha propuesto a los diputados: Juan José Bahillo, Diego Lara, Jorge Monge, Ricardo Troncoso y a la diputada María Alejandra Viola, para integrar la comisión.

Se va a votar.

-La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Aprobado por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.

No habiendo más asuntos por tratar, queda levantada la sesión.

-Son las 14.37.

Norberto R. Claucich
Director del Cuerpo de Taquígrafos